

Héctor Ignacio Martínez Álvarez

Coordinador

El ocaso de una época

Estado, política y crisis en América Latina

tirant humanidades

Ciudad de México, 2025

Copyright © 2025

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex

© Varios Autores

© TIRANT HUMANIDADES MÉXICO
EDITA: TIRANT HUMANIDADES MÉXICO
Av. Tamaulipas 150, Oficina 502
Hipódromo, Cuauhtémoc
06100 Ciudad de México
Telf.: +52 1 55 65502317
infomex@tirant.com
www.tirant.com/mex/
www.tirant.es
ISBN: 978-84-1081-478-3
MAQUETA: Innovatext

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com.
En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSC_Tirant.pdf

Índice

Presentación	9
Héctor Ignacio Martínez Álvarez	
América Latina en las crisis del sistema mundial	19
Jaime Osorio	
El enigma del desarrollo latinoamericano	43
Germán Carrillo García	
Crisis general y ofensiva del capital: balance del ciclo progresista y florecimiento del proyecto neofascista en América Latina	105
Andrea Taborri	
¿El ocaso de la consolidación democrática?: populismo y crisis institucional en México	141
Gabriel Pérez Pérez Zoila Román Espinal	
El obradorismo y MORENA en México. Del ideal posrevolucionario al transfuguismo político	171
Octavio Humberto Moreno Velador Iván Cano Capetillo	
Crónica de una muerte anunciada: la integración subordinada del capitalismo dependiente mexicano en los circuitos del imperialismo estadounidense	195
Héctor Ignacio Martínez Álvarez	
Neofascismo brasileño: “contra el orden”, alimentándose de él	247
Pedro Rozales R. Dominczak Camilla dos Santos Nogueira	
¿Una crisis de hegemonía? El gobierno de Díaz Canel y los desafíos de la Revolución cubana	277
Daniel Cubilledo Gorostiaga	

La llaman «democracia» y no lo es. Neoliberalismo, anocracia y la permanente excepcionalidad autoritaria en Colombia	313
Angélica Gunturiz	
José Francisco Puello-Socarrás	
El rol del Estado en el desarrollo del capitalismo dependiente peruano	363
Jan Lust	
Estado, hegemonía y crisis en Argentina. Proyectos en disputa y un equilibrio catastrófico	397
Gastón Ángel Varesi	

El enigma del desarrollo latinoamericano

Germán Carrillo García*

Introducción

En cierta ocasión Albert O. Hirschman al estudiar la influencia de las “ideologías” en la naturaleza del “desarrollo de América Latina” argumentó que a lo largo de la historia continental se había producido un “característico divorcio entre ideología y realidad”; una constante y amarga “colisión entre teoría y práctica”, entre el verbo y la acción, “el contenido y la forma”. Sin duda, como sabía el eminente intelectual de origen alemán, este desfase no era, como no es, exclusivo de la identidad política latinoamericana. La brecha que suele separar los propósitos de la poética constitucional y el Estado de derecho de la realidad social ha sido casi siempre demasiado profunda y contradictoria. Pero, como no podía ser de otro modo, la heterogénea región tenía sus propias particularidades. Hirschman había observado entre los sectores políticos latinoamericanos una constante inclinación —quizá motivada por la ansiedad de resolver *rápidamente* los problemas de sus respectivos países— “a echar mano de las prescripciones políticas ya elaboradas por las diversas ideologías” predominantes. Se trataba *prima facie* de una

* Departamento de Sociología, Universidad de Granada, España. Esta investigación fue apoyada por un programa de Intercambio de personal de investigación e innovación Marie Curie dentro de HORIZON-MSCA-2023-SE-01 (TRACHMED, GA: 101182876).

política procustea donde la realidad social debía de ajustarse forzosamente a los requerimientos ideológicos de moda. En parte, esta era la política contra la que vehementemente luchó durante la turbulenta década de 1930 Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, partido de vocación antiimperialista con influencias de la socialdemocracia europea, cuando aspiraba a crear un “modelo” propio “indoamericano” de desarrollo, a salvo de las “corrupciones e injusticias” del mundo exterior. Sin embargo, como sabía perfectamente este político e intelectual peruano, las ideas no suelen ser valores absolutos, y aunque tienen un origen concreto, sus principios migran histórica y continentalmente para ser una y otra vez destilados y mezclados en los contenedores nacionales, apelando a valores tradicionales tales como la religión, el nacionalismo y la cultura. Intentar aislar las ideas de la química política es un deseo vano. Por esa razón Hirschman no creía en la presunta muerte de las ideologías que Daniel Bell en *The End of Ideology* (1960) había puesto en circulación mundial un año antes de que escribiera las palabras arriba citadas. En el sur del continente americano el campo de fuerza de las ideologías seguía “desempeñando su papel acostumbrado, inspirando a los hombres, impulsándolos a acciones que tienen efectos positivos y negativos sobre el crecimiento económico” (Hirschman, 1961/1963). En definitiva, como desea recordarnos medio siglo después Piketty en *Capital e Ideología*, aquellos que dicen defender un “pragmatismo absoluto” libre de cualquier contaminación ideológica apenas logran “disimular su falta de interés por los hechos, la dimensión de su ignorancia histórica, lo cargante de sus prejuicios y su egoísmo de clase” (Piketty, 2019, p. 22-23).

¿Cuáles han sido las ideologías más influyentes en la región después de la independencia y cómo han modelado la historia de su desarrollo? ¿Qué consecuencias tuvieron en la *praxis* política y social continental? Durante el último tercio del siglo XIX un liberalismo con características latinoamericanas, aupado a lomos de estados oligárquicos, proporcionó un crecimiento económico nada desdeñable a través del sector externo de materias primas y recursos naturales cuyo destino era alimentar

la industrialización de los países centrales del capitalismo. Al mismo tiempo, la política mantenía en los márgenes de la desigualdad económica y racial a la mayor parte de la población, cuya reproducción social seguía dependiendo de los tradicionales mercados domésticos. En los años treinta del siguiente siglo, en algunos casos con anterioridad, el liberalismo penetró en una fase de crisis mundial y, como consecuencia, la economía fue reorientada relativa y selectivamente en la dirección opuesta del sector primario. Durante el periodo central del siglo XX los guiones de la alta política comenzaron a escribirse en los términos del Keynes argentino, Raúl Prebisch. La región, con tonalidades considerables, comenzó en unos casos, o aceleró en otros, un proceso de “desarrollo desigual y combinado” —tal como fuera formulado elocuentemente por Trotski— donde la industrialización, el crecimiento económico, productivo y demográfico, así como un relativo bienestar social se mezclaban, con diferentes pesos y contrapesos, con el salto cuántico del campesinado hacia las ciudades, la represión política y social, la pobreza rural y el abrumador crecimiento de villas miseria. La combinación de modernización con las dificultades materiales y la ira social ante la injusticia y los límites políticos de la distribución de la riqueza era una mezcla explosiva que creaba una inquietante atmósfera continental.

En la década de 1970, o más preciso durante los últimos años de la anterior, aquella fase de la historia latinoamericana estaba llegando a su final. En aquel momento varios aspectos relevantes, como la deuda acumulada (que sería llevada a niveles estratosféricos por el *shock* de Volcker en 1981), una protección industrial fosilizada y la espectacular escalada de violencia del estado sincronizada con las agujas calientes de la Guerra Fría dirigida desde Washington, dejaron la pista despejada para la penetración de la ideología más exitosa de la historia de la humanidad, el neoliberalismo (Anderson, 2006). Pero las ideas hegemónicas rara vez están a salvo de sus émulos políticos e intelectuales, como demuestra la extraordinaria y vibrante historia del socialismo, el anarquismo y el movimiento obrero que, con diversas intensidades, actuaron casi siempre como fuerzas de choque contra el pensamiento

dominante. Sin embargo, desde el triunfo de los regímenes neoliberales las alternativas políticas e intelectuales no han sido lo suficientemente poderosas como para socavar su hegemonía. Y en esto, precisamente, América Latina no fue una excepción. Desde la década de 1990 las economías del hemisferio occidental fueron sellando su destino con la dinámica destructiva del capital ficticio al mismo tiempo que enterraban los últimos vestigios de las ideas keynesianas y cepalinas de la segunda posguerra. Los beneficios financieros, que no producen valor por sí mismos, quedaron orgánicamente vinculados a la lógica de la “desposesión y el parasitismo”. La expropiación de la esfera pública, la austeridad fiscal y las reformas estructurales se mezclaron con un nuevo espíritu del capitalismo antischumpeteriano, cuyas consecuencias, a su debido tiempo, serían explosivas. No solo se produjo un estancamiento del crecimiento económico y de la productividad con profundas repercusiones desde cualquier punto de vista, sino que, observado retrospectivamente, aquella encarnación del capital ficticio dejó a su paso una montaña de ruinas sociales y ecológicas que parecía haber aplastado con su peso todo vestigio de imaginación social y esperanza política para concebir un mundo distinto. Esta nueva dinámica irracional del capitalismo pudo desarrollarse, en parte, con el apoyo incondicional de las autoridades públicas cuya oposición política fue notablemente insuficiente y, en parte, por la “bonificación imperial” de la nueva división global del trabajo y del capital (Durand, 2018).

Así las cosas, durante las primeras décadas del siglo XXI, mientras el centro de gravedad de la economía mundial se desplazaba lenta pero imparablemente hacia Asia Oriental, generando diversas crisis espasmódicas y guerras frías y calientes con consecuencias todavía imprevisibles, la mayor parte de las economías de América Latina orientaron, una vez más, el motor del crecimiento hacia el mercado exterior de materias primas y recursos naturales. Políticamente, al menos allí donde la izquierda asumió el poder, los gobiernos intentaron con mayor o menor creatividad deshacerse del trágico legado político neoliberal, impulsando políticas progresistas y estabilizadores sociales con la finalidad de

atenuar la escalada de las desigualdades sociales, de poder y riqueza. Sin embargo, una combinación de problemas estructurales, en buena medida heredados del pasado, con la nueva dinámica del capitalismo global (envuelta en un explosivo *tour de force* entre la *Pax Americana* y la nueva hegemonía China) y el poder de enormes conglomerados familiares que priorizaron las “ventajas ricardianas pasivas” y los activos líquidos del mercado de materias primas a las inversiones en capital fijo, mantuvieron bloqueadas las expectativas de progreso social y los principios de justicia democrática en la región (Adelman y Pryluka, 2024; Palma, 2019). Pero la política latinoamericana, como de costumbre, no permaneció suspendida en el vacío. Las ansiedades y tumultos colectivos, las turbulencias geopolíticas y sus enmarañadas relaciones nacionales, la irrupción de la violencia y, ciertamente, el incremento de la desigualdad y la terca exclusión, fueron instrumentalizados por una química política que, como un bifronte, podría encarnar en cualquier momento una solución autoritaria, o bien un estallido revolucionario. En cualquier caso, como sabemos, el futuro es impredecible, pero, sin la menor duda, sus líneas comenzaron a ser trazadas en el pasado donde, además, suelen encontrarse las semillas de otros futuros quizá menos sombríos que el presente. Por esa razón conviene comenzar echando la vista atrás.

Liberalismo con características latinoamericanas

La independencia política no implicó necesariamente la conquista de la independencia económica, “pues si bien Latinoamérica rompió sus antiguos lazos con las monarquías ibéricas, no cortó sus vínculos comerciales con el mundo exterior”. Pronto circuló por el torrente económico de la región la libra esterlina en su forma crediticia y en poco tiempo la mayor parte de las nuevas repúblicas acumularon cantidades nada triviales de deuda externa. Los inversores británicos formados por banqueros, comerciantes, especuladores de todo tipo y políticos creían correctamente que el capital financiero en forma de empréstitos podía vincular los circuitos del comercio imperial con la región. De este modo se podía garantizar tanto la explotación de los recursos naturales, espe-

cialmente del subsuelo, como la hegemonía naval británica en las dos franjas oceánicas. Pero este “primer ciclo de préstamos latinoamericanos” no puede concebirse exclusivamente como un interés unilateral de Gran Bretaña. Para poder trazar los contornos jurídicos y políticos de las jóvenes repúblicas —divididas regional, social, política y étnicamente— se precisaba, como lacónicamente afirmó Bolívar en 1823, de “grandes recursos que sostuvieran “la Marina y el Ejército” y para ello era “absolutamente necesario el empréstito solicitado a Londres” (Marichal, 1988). Por su parte, el comercio internacional no solo conllevó la compra y venta de productos y servicios en los mercados regionales y atlánticos, fue también la vía por la que circularon ideas y libros que sirvieron frecuentemente de inspiración para llevar a cabo acciones políticas entre las élites republicanas, aunque también para liberar tensiones sociales entre las clases populares durante mucho tiempo reprimidas. Así, el siglo que transcurre entre 1760 y 1860, es decir, entre el fin del “capitalismo comercial”, desarrollado desde mediados del siglo XV, y el auge del “moderno desarrollo económico”, una “burguesía cosmopolita” formada por ricos comerciantes y “comunidades extranjeras” situadas en los puertos y principales ciudades de la masa continental americana, así como políticos e intelectuales, actuaron como redes de intercambio y circulación transnacional de “bienes, capital e información en los centros del comercio mundial” (Jacobsen, 2007). Los principios del liberalismo y del socialismo, aunque no exclusivamente, fueron penetrando en la región donde eran transformados por el peso de las circunstancias y la originalidad del pensamiento latinoamericano.

La generación política de los años cuarenta del siglo XIX, que creía que sus predecesores habían “fracasado” en su objetivo de “liberalizar la sociedad hispanoamericana”, sabía perfectamente que no podía disociarse lisa y llanamente de las condiciones materiales del conjunto del cuerpo social. Con diversos tonos políticos se insistió en “racionalizar la economía” siguiendo los preceptos “liberales”, poniendo además el acento “en el individualismo liberal y en el ideal de la igualdad ante la ley”, lo que implicó en algunos casos la abolición de privilegios ecle-

siásticos y del ejército (Safford, 1991: 80-83). Sin embargo, la moral de la nueva sociedad evolucionaba paralelamente bajo la autoridad de la nueva economía: el liberalismo con características latinoamericanas. Se trataba en esencia de una ideología económica que no podía en ningún caso definirse dentro de los parámetros clásicos del *laissez-faire*; como tampoco la “nación comercial más poderosa del mundo y las más comprometida con el libre comercio”, Gran Bretaña, constituía un modelo esencialista de liberalismo económico. Desde el seno imperial se aplicaban “numerosas restricciones a su comercio con el resto del mundo, así como gravámenes discriminatorios a favor de sus colonias”. Así sucedió también en Estados Unidos, cuyas élites políticas se inspiraron en las teorías del economista y primer secretario del Tesoro de aquel país Alexander Hamilton (1757-1804), consistentes en mantener elevadas tasas impositivas a las importaciones con el fin de favorecer a los incipientes sectores industriales. Únicamente “cuando América haya obtenido de la protección todo lo que ésta puede ofrecer” —afirmó el presidente estadounidense Ulysses Grant (1868-1876) tiempo después de que Hamilton abandonara este mundo—, “entonces favorecerá el libre comercio” (Shaikh, 2007). En cualquier caso, ya fuera a través de barreras arancelarias o no, la transición al libre comercio para las nuevas repúblicas latinoamericanas no supuso una depresión de los mercados internos. De hecho, en algunos casos se produjo una protección de “muchos bienes industriales”. Así, la entrada de productos importados de los países nuclearios del capitalismo, especialmente de Gran Bretaña, pero también de Estados Unidos y Francia, estimuló en varias repúblicas, sobre todo en México, la introducción de innovaciones en los equipos manufactureros que permitió en el caso mejicano competir formalmente con la producción de obrajes británicos y con el sector importador. En términos generales, aunque el tamaño de los mercados era todavía reducido, el perfil demográfico no era muy diferente de aquellos países de Europa en los que comenzaba a arraigar la Revolución Industrial. Por otro lado, durante las primeras décadas de las jóvenes repúblicas las deficitarias infraestructuras de los medios de transporte y sus altos costes actuaron como barreras naturales para proteger al sector arte-

sanal. Los acalorados debates económicos que tendrían su máxima expresión durante el periodo de la segunda posguerra mundial, o incluso antes, durante la Gran Depresión, no fueron tan relevantes durante los primeros años de la Independencia. “Se había resuelto la cuestión del libre comercio” y “se consideraba aceptable cierto grado de protección para la actividad interna y, en general, se alentaban la inversión y la inmigración extranjeras” (Bulmer-Thomas, 1998). La “emancipación espiritual” que habían anhelado los “liberales de principios del siglo XIX” parecía haber sido consumada durante sus últimos años. “Guiadas por los principios de la libre empresa individual, escribió Charles A. Hale, las naciones latinoamericanas habían entrado en el sistema económico del mundo civilizado. La prosperidad comercial resultante de ello y el crecimiento de centros urbanos avanzados y cosmopolitas fueron, a ojos de las gentes de la época, simplemente señales de que la edad del liberalismo había llegado”. Pero se trataba de un espejismo, de un “mito unificador” (Hale, 1991).

El liberalismo con características latinoamericanas, dirigido desde la sala de mandos del Estado oligárquico, tenía la tarea histórica de “desbrozar el terreno” del bosque político y social con la finalidad de extender y consolidar las relaciones de producción capitalistas. Constituyó una “etapa necesaria en el avance del capitalismo, dado que éste requería de ciertas condiciones que sólo podían satisfacerse mediante la organización de un aparato administrativo y coercitivo centralizado y de alcance nacional”. Dado que esta tarea política era del todo inverosímil tras las guerras de independencia, el proyecto adquirió a lo largo del siglo XIX un lugar central en la política continental. Sin embargo, la naturaleza del gobierno de las élites oligárquicas era abrumadoramente ambigua, cuando no abiertamente contradictoria. La “organización jurídica”, ideológica y discursiva podía considerarse como liberal, aunque su *praxis* política manifestaba un permanente “desprecio por la participación de las clases subalternas y la cultura popular”. En *le pays légal* se sancionaba la igualdad ciudadana, la garantía de las libertades elementales, la lucha enconada contra los “anacrónicos privilegios de la Iglesia”,

o la teórica división de los poderes públicos; incluso se derogaba la esclavitud y las formas de servidumbre “creando así un mercado de hombres libres”. Pero en *le pays réel*, “todos estos rasgos y políticas liberales y jacobinas se estrellaban contra la dominación exclusiva y oligárquica del nuevo bloque en el poder”. Sus miembros formados por poderosos terratenientes y hombres de negocios de la nueva burguesía mantenían un vínculo orgánico con el aparato estatal y, con frecuencia, con el “capital imperialista” (Borón, 2003, pp. 102-104). En regímenes de este tipo, la línea divisoria entre la economía y la política era muy difícil de trazar.

No obstante, el Estado oligárquico no era monolítico, como tampoco las ideas liberales. Existían “casos en los que el miedo al rechazo o la rebelión desde abajo” creaba serios problemas a los círculos políticos y económicos. Ya se tratase de países donde predominaba una forma política “liberal-constitucional”, “dictatorial” o “antiestatal descentralizada”, durante estos años las “condiciones objetivas para una masiva intervención estatal” sencillamente no existían: “El control territorial generalmente era insuficiente, la capacidad administrativa inadecuada y los recursos públicos demasiado limitados como para permitir una relación relativamente estructurada entre el Estado y la sociedad civil”. ¿Sería correcto entonces denominar “liberal” a esta forma política? “Sería tentador”, afirma Whitehead, calificar de “liberal” a esta extraña y ambigua “relación” (aunque así la denominaban los contemporáneos), “si no fuera porque en los procesos de construcción estatal estos estados resultaron con frecuencia sumamente autoritarios hacia grupos sociales específicos e intervencionistas en ciertos asuntos económicos de forma bastante efectiva” (Whitehead, 1997, p. 68). El liberalismo latinoamericano no solo consistía en una amalgama de ideas adaptadas según los principios e intereses de las clases políticas y dirigentes de cada nación, sino que las contingencias y coyunturas económicas del momento transformaban continuamente las perspectivas de su desarrollo (Jacobsen, 2007). Independientemente de las tonalidades de la política continental, que las hubo y muy acusadas, no era difícil identificar lo que tenían en común las diferentes repúblicas, especialmente debido al

impacto de la hegemonía británica que afectó directa o virtualmente a todas las economías periféricas.

En primer lugar, la hegemonía global indirecta de la *Pax Britannica* que dirigió los designios del mundo desde Waterloo (1815) hasta las simas de la primera guerra mundial produjo dos acontecimientos que cambiaron drásticamente y profundamente la historia de la humanidad. El primero de estos acontecimientos fue la explosión fabril británica después de la precedente fase de “acumulación primitiva” —escrita como diría Marx con “trazos indelebles de sangre y fuego”— que transformó a Inglaterra en el taller del mundo. La expansión del comercio internacional de la era victoriana y la siempre persuasiva diplomacia de las cañoneras ampliaron los circuitos del capitalismo global, desencadenando un segundo fenómeno: la era de la primera globalización. Siguiendo los modelos estilizados de la teoría ricardiana de las ventajas comparativas del comercio internacional, tan solo había que tener la suficiente paciencia y tenacidad para que los intercambios generaran riqueza y prosperidad entre las naciones participantes del nuevo orden económico. Sin embargo, a pesar de la profunda aceptación del “principio de ventaja comparativa” —que a ojos de Keynes había conquistado el pensamiento económico inglés como la Inquisición lo hizo con España— la ley no ha dejado de estar en “profunda contradicción con los hechos” (Palma, 2019, p. 945; Shaikh, 1990, p. 217). El *doux commerce* —el mejor antídoto de las destructivas pasiones humanas— comenzó a expandir la brecha que ya separaba “el nivel de vida y la renta per cápita de los países industriales punteros y los de la periferia pobre”. Por su parte, el cambio tecnológico y el asombroso desarrollo del transporte marítimo y terrestre alteraron para siempre el espacio relativo acortando distancias y conectando mercados. Durante un siglo los países situados fuera del núcleo del capitalismo iban a disfrutar de unos términos de inter-

1. Expresión satirizada por Marx, quien al interpretar la fase de acumulación primitiva del capital “revisa algunos de los episodios más violentos de la historia de la expansión comercial europea”. Véase Hirschman (2014, 83-84).

cambio favorables debido al aumento extraordinario de la demanda de “insumos necesarios para alimentar a las fábricas de Europa (y a la de sus satélites de habla inglesa)”, así como el consumo conspicuo de los sectores sociales elitarios de cualquier parte del mundo. La era de la primera globalización había provocado dos explosiones, la del comercio mundial y la de los términos de intercambio: el resultado fue el inicio de la primera Gran Divergencia (Williamson, 2012, pp. 287-290).

La periferia se especializó en la exportación de materias primas y productos básicos, mientras que el centro del sistema mundial lo hizo en la producción de manufacturas. De este modo, tres “canales de impacto”, de acuerdo con la correcta interpretación de Williamson, se desencadenaron durante este periodo histórico persistiendo tenazmente en el tiempo. El primero supuso el avance de la desindustrialización de la periferia, al menos allí donde la autonomía nacional, el relativo proteccionismo y la productividad agrícola lo habían permitido (Williamson, 2012). Quizá el caso más ilustrativo sea México. En 1879 su industria textil fabricaba en sus telares el 60 por 100 de las demandas textiles nacionales, y tan solo importaba un 40 por 100, y en algún momento antes de la Revolución (1910-1917) el índice de mecanización por trabajador equivalía al 77 por 100 de los telares británicos. Esto se debía en parte a las políticas proteccionistas (basadas sobre todo en elevados aranceles), derivadas además de una autonomía de la que no disfrutaban otros países de la periferia, y, en parte, a una relativa productividad agrícola sostenida en el tiempo (“un acontecimiento poco corriente en la periferia pobre de la época”); factores que, combinados con el citado desarrollo fabril, hicieron de México una economía virtualmente floreciente (Williamson, 2012, pp. 86, 164, 220-255). Pero el “progreso” iba indisolublemente asociado al “orden”, es decir, al racismo. El Estado porfirista, siguiendo los criterios de los “científicos”, quiso barrer todos los obstáculos al “progreso”, entre los cuales se hallaban los renuentes pueblos indios, como la nación yaqui del Estado septentrional de Sonora. Había decidido hacer de la población indígena “un valor social” poniéndolos a trabajar “detrás de un arado”. Sus intereses, sin embargo, no coincidían

con los yaquis, pero sí con los de una compañía estadounidense a la que cedió algo más de 221.000 hectáreas del valle de este pueblo de indios; estos respondieron con la tradicional guerra de guerrillas hasta que finalmente los generales porfirianos, que se contaban entre la aristocracia de plantadores de henequén en Yucatán, optaron por deportar a los varones y emplearlos en sus cultivos. Seguramente, entre un tercio o la mitad de una población de 30.000 yaquis varones fueron separados de sus familias (Bauer, A., 2002; Carrillo García, 2017). Allí donde la fuerza y la coerción predominan, los resultados no suelen ser favorables a las clases populares. Uno de los resultados sociales de la dictadura porfirista fue el incremento de la “desigualdad vital”: mientras las “masas se hicieron más bajas”, los sectores elitarios elevaron su estatura con respecto a sus antepasados (Therborn, 2011).

El segundo canal de impacto conllevó un incremento de la desigualdad en cualquiera de sus formas que afectó a los que no disfrutaban de las virtudes económicas de aquel intercambio comercial. De hecho, la riqueza del suelo y del subsuelo, es decir, los recursos naturales que eran la base del patrimonio de las naciones primario-exportadoras, permaneció bajo la estricta propiedad de una minoritaria “oligarquía rica” cuyo propósito no se desviaba en lo más mínimo de una “excesiva búsqueda de rentabilidad” (Williamson, 2012). La biliosa crítica de Adam Smith contra los improductivos propietarios insulares podía reorientarse sin objeciones hacia las provincias de ultramar: “La satisfacción de la vanidad más pueril —escribía en *La riqueza de las naciones* (1776)— era el único motivo que guiaba la conducta de los grandes propietarios” (Davidson, 2013, p. 97). Ahora bien, allí donde las comparaciones son posibles, la América Latina preindustrial (es decir, anterior a 1880) no mostró una desigualdad más acusada que la sufrida por el conjunto de países que formaban la Europa septentrional preindustrial (anterior a 1810). Y durante los años de la *Belle époque* (1880-1914), aunque el mundo en su conjunto penetró en una fase de desigualdad comercial y financiera, las disparidades en la región medidas con un coeficiente de Gini de 46,4 no fueron muy distintas de las que afectaban a otras sociedades

periféricas (Gini 44,3); incluso la región “salió relativamente bien parada” con respecto al continente africano o con la vasta masa continental asiática durante aquel medio siglo previo a la primera guerra mundial. No obstante, la brecha con Occidente no dejaría de ensancharse. En el año de la Gran Depresión (1929) el PIB per cápita promedio de América Latina apenas representaba el 37 por 100 del occidental (Maddison, 2004; Williamson, 2015; Bértola y Ocampo, 2010, p. 129).

Un tercer canal de impacto que iba a gravitar sobre la periferia, subordinándola dentro del nuevo orden mundial, sería la volatilidad de los precios de las materias primas y productos básicos. El destino económico de los países exportadores parecía depender irrevocablemente de los términos de intercambio sujetos a la variabilidad de los gustos en la demanda o a la siempre despiadada competencia del mercado. Sin embargo, a pesar de que el comercio internacional actuó reforzando mutuamente la industrialización del centro y la desindustrialización de la periferia, también elevó las curvas de crecimiento económico en las regiones exportadoras primarias (Williamson, 2012). Entre 1870 y 1929 el régimen primario-exportador latinoamericano arrojaba una tasa de crecimiento anual de un 4,2 por 100, su participación en el PIB mundial ascendió de un 2,6 a un 5,2 por 100, y el PIB per cápita se elevó por encima del promedio mundial. A pesar de ello, es probable que algo del 80 por 100 de la producción tuviera como destino el abastecimiento de la demanda de los mercados domésticos (Bértola y Ocampo, 2010, p. 110; Ocampo, 2012, p. 14).

Por otro lado, el liberalismo finisecular no consideraba que el “crecimiento de las exportaciones y el proteccionismo” fueron aspectos antagónicos, sino todo lo contrario, eran políticas complementarias que debían contribuir a la modernización de sus respectivos países. De hecho, desde las postrimerías del siglo XIX esta fue la política que gravitó sobre las economías de Brasil, Chile, Colombia y México; países de “industrialización temprana” que habían aplicado elevadas tasas arancelarias con el fin de preservar las industrias locales de las contingencias del mercado internacional (Bértola y Ocampo, 2010, p. 145). Parece evidente

que los “responsables políticos de las regiones de la periferia provistas de autonomía arancelaria” habían leído y comprendido en su tiempo la literatura de la “industria incipiente” del economista alemán Friedrich List y el citado Hamilton (Williamson, 2012, p. 273). “Es una regla general de prudencia” —escribió List en una filípica destinada a Smith— “que, una vez llegados a la cumbre de la grandeza, se arroje tras de sí la escala que nos ha servido para ascender, a fin de que otros queden privados de la posibilidad de alcanzarnos. En ello radica el secreto de la teoría de Adam Smith, de las tendencias cosmopolitas de su gran contemporáneo William Pitt y de todos sus sucesores en la administración inglesa”. Poniendo de relieve una de las contradicciones fundamentales del liberalismo económico, List señalaba cáustica pero correctamente que Inglaterra “con sus medidas protectoras y restricciones a la navegación” había creado “su energía manufacturera y su flota de tal modo que ninguna otra nación” tenía la posibilidad de “competir libremente con ella”. De hecho, concluía con cierto sarcasmo, lo único que podía hacer, y quizá lo más sensato para salvaguardar su hegemonía, era “destruir estas escalas que han dado acceso a su grandeza” y al mismo tiempo instruir “a otras naciones las ventajas de la libertad comercial, y declararse arrepentida por haber seguido hasta entonces la senda del error, y haber emprendido sólo ahora el camino de la verdad” (List, 1841/1997, pp. 319, 413-414).

Lo que era y sigue siendo evidente, contra la *reductio ad absurdum* basada en la simbiosis entre “liberalización comercial y crecimiento más rápido”, es que “casi todas las experiencias exitosas de crecimiento orientado a las exportaciones han sido el resultado de un comercio selectivo y de políticas de industrialización”. Y, en consecuencia, allí donde surgían países con economías florecientes, la planificación política corregía la discrecionalidad del mercado y solo se defendía el libre comercio cuando éste ofrecía “ventajas comparativas”. Argumentos que pueden ser verificados “no solo en los últimos tiempos sino incluso en el pasado”, cuando las economías avanzadas del núcleo central del capitalismo se hallaban inmersas “escalando la escalera del éxito” (Shaikh,

2007, pp. 50-68). Sin embargo, la brecha entre los racionales postulados de List y la *Realpolitik* no dejó de ensancharse, y no existe ninguna duda de que allí donde la periferia mantuvo una política proteccionista como en Latinoamérica especialmente a finales del siglo XIX no estaba motivada por un fomento consciente de la industrialización. A diferencia de los países industriales, los periféricos durante la era de la primera globalización no fueron capaces en términos generales de “proporcionar a su crecimiento endógeno” el impulso necesario para fomentar y, sobre todo, consolidar la industrialización (Williamson, 2012, p. 287,69). El carácter y la escala de esta nueva división internacional de los factores productivos tendría graves consecuencias durante mucho tiempo. No solo generó una dramática dependencia por parte de la periferia de bienes manufacturados del centro industrial, e incluso de productos de primera necesidad; también conllevó un incrementalismo del déficit de la balanza comercial financiada con cantidades cada vez más onerosas de deuda externa. Después de todo, la ley ricardiana del comercio internacional se había gestado como extensión de su otra ley fundamental, la del valor-trabajo cuyo esfuerzo más activo consistía en “aislar la renta de la tierra, no el pago de los intereses”. Ricardo, perteneciente a una familia de banqueros, condenaba así a sus coterráneos terratenientes, pero redimía a los prestamistas (Hudson, 2018, pp. 88-91).

Solo en la bisagra entre ambos siglos el proteccionismo se usó con el “específico y deliberado objetivo de dinamizar el sector industrial”. El porfiriato mejicano, como hemos visto, durante la década de 1890 fue el pionero en la región; seguido de Brasil y Chile, y ya en 1900 de Colombia. Hasta aquel momento, los muros arancelarios posiblemente no podían usarse como medio para calentar el motor de la industrialización, pero sin duda podrían haber compensado “las pérdidas de la desindustrialización generalizada que provocó la explosión de los términos de intercambio registrada en el siglo XIX”, una explosión que, en cambio, benefició a los productos básicos (Williamson, 2012, p. 273-276). Por supuesto las oportunidades para los sectores no primarios de la economía latinoamericana eran escasas dentro del nuevo orden de la primera glo-

balización. “La dependencia económica —entendida para este periodo sobre todo como la aceptación de un lugar en la división internacional del trabajo fijado de antemano por la nueva metrópoli económica— impuso limitaciones rígidas sobre las posibilidades de diversificación económica en las áreas así incorporadas más estrechamente en el mercado mundial” (Halperin Donghi, 2002, p. 33). ¿Por qué?

Naturalmente las causas concretas eran múltiples, pero, además de la ley ricardiana, había un factor común subyacente que nos ayuda a comprender los desequilibrios del nuevo orden internacional. Con el desarrollo y la inserción de los países periféricos en la economía mundial se creaba una red de interdependencia mutua entre aquellos y los países centrales que no iba a favorecer necesariamente a los primeros, al menos no a la gran mayoría de sus habitantes. Como expresaría con extraordinaria lucidez Lenin en *El Imperialismo, fase superior del capitalismo* (contrariamente al evolucionismo simplista de Bernstein y Kautsky): “El desarrollo desigual y espasmódico de las distintas empresas, ramas industriales y países es inevitable bajo el sistema capitalista” (Lenin, 1916/1970, p. 741). Pero las relaciones de dependencia centro-periferia eran, como son, mucho más complejas y difusas. Por esa razón era necesario un concepto más elaborado para comprender la dinámica del proceso de la nueva división del mundo y, sobre todo, sus consecuencias. El concepto de “desarrollo desigual y combinado”, tal como fuera formulado por Trotski, iba más lejos que el “desarrollo desigual” de Lenin, y era, como Ernest Mandel dijo en cierta ocasión, suficientemente distinto a la “ley del desarrollo desigual” que conocía la práctica totalidad de los marxistas. Pero ¿en qué consistía esta nueva formulación del político y revolucionario ruso y en qué medida contribuye a explicar la heterogénea realidad latinoamericana? “El atraso histórico”, escribió, “no implica una simple reproducción del desarrollo de los países avanzados”, sino que genera una nueva formación social “combinada” en la que el modo de producción capitalista arraiga, mezclado y destilado, con los “modos preexistentes” (Davison, 2010). Dicho de otro modo, las fuerzas económicas desatadas creaban un nuevo orden mundial, pero

aquellas penetraban en las capas culturales de los espacios nacionales generando procesos de industrialización y urbanización, y transformando drásticamente el mundo campesino, cuyo resultado, en su conjunto, ofrecía un patrón de desarrollo totalmente diferente al de los países centrales. La conclusión, por tanto, no era una simple alteración de los términos de intercambio o de aspectos meramente económicos, sino una transformación total del conjunto de la vida social. Como afirmó Hirschman en una sólida crítica de las teorías de la modernización de los años sesenta y setenta del siglo XX, era evidente que los países que formaban parte de la periferia no responderían mecánicamente a los estímulos de la modernización, como tampoco adoptarían los diversos moldes esquemáticos del desarrollo como si se tratasen de “juguetes de cuerda que avanzaran en línea recta por las diversas etapas del desarrollo” (Hirschman, 1984, p. 27-39; Carrillo García, 2019, p. 77).

Aunque hubo regiones que se desarrollaron con cierto éxito, diversificando sus estructuras económicas, generando un cierto dinamismo industrial, ampliando la red de comunicaciones, transportes y servicios financieros, así como un importante proceso de urbanización, el desarrollo desigual y combinado permaneció en cualquier caso intacto. La brecha entre regiones ricas y pobres dentro de los territorios nacionales, nominalmente independientes, pero en la práctica todavía semicoloniales, era abrumadora. Así, por ejemplo, desde las postrimerías del siglo XIX predominó una floreciente agricultura comercial en la templada y húmeda región pampeana donde un incipiente sector de agricultores “progresistas”, cuyas unidades productivas operaban bajo consignas empresariales, inundaron de carne el mercado del Atlántico Norte, erigiéndose en 1920 como primer exportador mundial. También la región chilena de Llanquihue, al sur de la Araucanía, a comienzos del siglo XX estuvo dominada por familias chileno-alemanas “con intereses agrarios, industriales y comerciales” que desataron una fiebre especulativa sobre la tierra imponiendo progresivamente un régimen terrateniente, contribuyendo a su vez a un embrionario desarrollo de la industria local que permitió atenuar tempranamente el sistema bimodal latifundio-mini-

fundio y expandir sectores de agricultores capitalizados. A partir de mediados de 1910 Chile se hallaba en el umbral de la “era del tractor”. Otra excepción regional se situaba en la región occidental de la extraordinaria masa continental brasileña. Entre 1900 y 1918 la gran plantación que suponía el Estado de São Paulo abastecía algo más de la mitad del café consumido en el mundo. Aunque fueron los barones del café los que detentaron el poder político y la concentración económica, los más de dos millones de inmigrantes europeos (italianos, portugueses y españoles) fueron engrosando las filas de trabajadores rurales que alentaron la demanda de una naciente producción industrial generada por la dinámica económica cafetalera. Las industrias locales textiles y alimentarias, o dedicadas a la construcción, incentivaron los intereses compartidos por los inversionistas agrícolas y los industriales paulistas. Pero la prosperidad no se distribuía de forma equitativa; incluso allí donde la moderna agricultura comercial había llegado, como en los citados casos, no constituía más que virtuales islas de bonanza restringida a una minoría social. Antes de que la carne pampeana inundara el mercado del Atlántico Norte, los fusiles Remington, el telégrafo y la viruela dejaron despejados los campos de indios (Rapoport, 2000:25); la prosperidad se debía en buena parte al control que ejercían las inmensas estancias ganaderas y cerealeras sobre los labradores, arrendatarios o trabajadores rurales sin tierra. Estos, por lo general, todavía en la década de 1940 llevaban una vida mísera en viviendas con “suelos de tierra y pocas comodidades”. En Chile, el pueblo mapuche había sufrido la expropiación de sus tierras y confinado en “reducciones”; además persistía una no desdeñable masa de jornaleros sin tierra o con parcelas cuya extensión no sobrepasaba el umbral de la subsistencia de la familia campesina. En Brasil, al tiempo que los nuevos colonos propietarios se expandían hacia el oriente, alejándose virtualmente de los grandes terratenientes, el intermediario local y la casa comercial ocuparían su lugar canalizando “los recursos fuera del área rural”, dificultando así un potencial desarrollo de la comunidad local (Long y Roberts, 1997, pp. 294-296; Carrillo García, 2017). Mientras la antigua estancia “cimarrona” uruguaya se transformaba en una productiva cabaña ganadera, el campo sufría un proceso de cerca-

miento, las técnicas agrarias permitían abastecer la demanda del mercado mundial, y amplias capas de campesinos incapacitados o excedentarios para transformar “la carne, la lana y el cuero en mercancías” fueron expulsados hacia las ciudades del interior del país y de la capital Montevideo (Riella y Mascheroni, 2011, p. 45). En los páramos andinos, los hacendados absentistas combinaban el gamonalismo, una forma de poder político rural resultado de la vigencia de una estructura estamental o de castas que había “naturalizado” la dominación étnica, con formas de explotación típicamente capitalistas. Incluso cuando las circunstancias eran propicias, no dudaron en despertar su espíritu capitalista y despojarse de los vínculos con la tierra o bien reforzarlos combinando la modernización de los medios de producción en sus extensas propiedades con nuevas actividades económicas surgidas en las ciudades (Ibarrá, 2003). Las economías de Uruguay o Argentina podían disfrutar de los mayores ingresos per cápita del planeta durante las postrimerías del siglo XIX, pero la distribución real de las rentas distaba mucho de basarse en criterios de igualdad. En la taxonomía del desarrollo desigual y combinado “lo arcaico y lo moderno, lo establecido y lo disruptivo, se superponen, se fusionan y se combinan” con resultados siempre impredecibles y con frecuencia explosivos (Davidson, 2010).

Sin embargo, los argumentos precedentes solo explican en parte por qué América Latina no pudo cambiar su situación periférica dentro del sistema solar que gravitaba en torno a los países industriales. La política fiscal arancelaria y proteccionista del régimen primario exportador podía contribuir a elevar el crecimiento económico, como de hecho hizo, pero no necesariamente favoreció una cultura democrática. El debate, empero, no es solo histórico. Las políticas selectivas con el comercio internacional solo pueden tener éxito allí donde la autoridad del Estado y los sectores elitarios en competencia han sido capaces de mantener un cierto equilibrio entre la lógica de acumulación capitalista y la reproducción social a través de la democratización política, la distribución económica y la protección de la ciudadanía. Es evidente que “el crecimiento económico, la paz y la estabilidad política” que caracterizó a la región después de

1860 no generó una “inclusión democrática” (Williamson, 2012, pp. 272-275). Hasta bien entrado el siglo XX, los derechos civiles asociados con la política de la democracia se mantuvieron férreamente restringidos en los vetustos muros de la riqueza. Y ello a pesar del impacto demográfico que tuvo la región a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuyos efectos desde cualquier punto de vista no tardarían en dejarse sentir. Entre 1850 y 1900 la población se multiplicó por dos, pasando de 30,5 millones de habitantes a 61,9 millones, y entre 1900 y 1930 ya había alcanzado los 104,1 millones (Sánchez-Albornoz, 1991, p. 107). La proporción de hombres que podían ejercer el derecho al voto durante las postrimerías de siglo XIX era abrumadoramente minúscula. El estatus de ciudadanía política no solo quedaba reservado al sexo masculino, sino particularmente a los que pertenecían a las clases económicamente pudientes. Las flamantes e inestables repúblicas con gran frecuencia “no cumplieron con los ideales constitucionales que proporcionaron” (Safford, 1991, p. 48). La nueva sociedad cimentada en una ficción de individuos considerados teórica y jurídicamente “iguales” era jerárquica y “vivía de acuerdo con las normas establecidas por las relaciones patrón-cliente propias de las sociedades en las que había una gran diferenciación social y económica”. En la Argentina de 1896 únicamente podía votar un tímido 1,8 por 100 de la población, cifra quizá exagerada; dos décadas después el número de electores había ascendido a un minúsculo 9 por 100. Hacia 1920 el país que registró el porcentaje más alto de votantes fue Uruguay, y lo hizo con un 3,8 por 100, mientras Chile no alcanzaba un 5 por 100 del conjunto de su población (Kenneth y Stanley, 2000: tabla 2). Como había dicho Marx, la “dictadura” de la burguesía podía prevalecer con sufragio universal o sin él (Hobsbawm, 2012, p. 67).

Además, aunque en términos generales entre 1880 y 1930 las organizaciones de trabajadores y los partidos políticos de izquierdas crecieron continentalmente, la reorientación económica caracterizada por la expansión del comercio exterior de materias primas y productos básicos provocó que la industrialización y, su consecuencia, los movimientos obreros se desarrollaran de forma lenta y fragmentaria (Carrillo García,

en prensa). “El tamaño y la composición de las clases trabajadoras, así como la naturaleza del Estado, hacían que la mayoría de los países fuese un terreno decididamente poco prometedor para las estrategias socialdemócratas basadas en la participación electoral de los trabajadores”. Aun así, no debemos subestimar la explosión de organizaciones obreras e ideologías políticas transcontinentales que durante los últimos años del siglo XIX fueron arraigando en América Latina y el Caribe. En Argentina y en su vecino septentrional Uruguay el credo anarquista encontró un fecundo apostolado entre la mayor parte de la clase obrera unida en “sindicatos y sociedades de resistencia” (Rama y Cappelletti, 1990). Durante la década de 1880 trabajadores fundamentalmente de origen inmigrante (algunos exiliados huidos de la carnicería de la Comuna de París, o fugitivos de la represión política de Alemania, Italia o España), se organizaron, crearon asociaciones y usaron la huelga como instrumento político con el fin de proteger sus intereses, reivindicar la reducción de la jornada laboral y un justo aumento salarial. Ferroviarios, artesanos y trabajadores cualificados “semiartesanales” contaron, entre otros muchos, con el apoyo de líderes revolucionarios como el exiliado y anarcosindicalista italiano Errico Malatesta (1853-1932). En Puerto Rico, Venezuela y Colombia, sin embargo, el anarquismo tuvo una influencia de baja intensidad, al menos entre la clase trabajadora. En Brasil, aunque los militantes anarquistas se mantuvieron casi siempre al margen de la política oficial, fueron perseguidos y desterrados, cuando no asesinados (Cappelletti, 2010; Rama y Cappelletti, 1990). En Cuba, después de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), “el anarquismo se convirtió en la ideología principal del obrerismo”; fue la ideología que inspiró a los sectores populares, especialmente urbanos, en su lucha contra el reformismo autocomplaciente de la burguesía criolla y peninsular. Las luchas obreras y el anarquismo confluyeron en una síntesis revolucionaria antirracista y populista que tuvo su máxima expresión en el fundador del Partido Revolucionario Cubano, José Martí (1853-1895). El partido socialista más importante durante estos años fue el argentino; sin embargo, desde su “fundación en 1896 siguió una política de reformismo parlamentario muy moderado y, transcurridos los primeros años de la

formación política, sus vínculos con los sindicatos se volvieron muy tenuous” (Hall y Spalding, 1991). Su fundador, junto a José Ingenieros, fue Juan B. Justo (1865-1928), un cirujano y polímata de clase media que anhelaba llegar al socialismo a través de la vía política parlamentaria y no por la revolucionaria. Como buen conocedor de las ideas de Marx —fue el autor de la primera traducción al español del volumen I de *El capital* (1898)— creía que a pesar de que la destrucción creativa del capitalismo sometía a la clase trabajadora, la modernización que impulsaba a costa de aquella crearía las condiciones necesarias para definir las “dos clases de cuyo antagonismo ha de resultar el progreso social” (Poy y González Rittler, 2017, p. 58). Un progreso que, sin embargo, continuaba sin llegar a la mayor parte de la población. Las élites poscoloniales y sus intelectuales habían levantado un muro político entre ellos y el “pueblo”, al que había que educar e inculcar los auténticos valores de la civilización moderna (Cerdá Mondéjar, 2024). En esta tarea, el romanticismo latinoamericano, como el europeo, sirvió de cobertura ideológica y pragmática a las nuevas clases burguesas con el fin de garantizar su fuerza social emergente sin tener que exponerse a una radicalización plebeya en la lucha contra los sectores más conservadores de la sociedad poscolonial. Los apóstoles del romanticismo americano, alejados conscientemente del supuesto “primitivismo” rousseauiano, deseaban destruir las formas de vida de las sociedades rurales dominadas por la naturaleza, terminar con la “barbarie e imponer el reino de la civilización”. Defendían un ideario político de inspiración liberal y, al menos en teoría, anhelaban “superar la democracia puramente formal”. Pero, aunque defendían la igualdad y la libertad, la primera siempre terminaba subordinada a la segunda; por su parte, la fraternidad quedaba suspendida en el vacío.

Quizá no haya existido otra época ni otra generación de intelectuales, afirma correctamente Marta Pena, en la que la síntesis entre literatura y política haya ejercido una influencia tan asombrosa. Se trataba de “hombres que hacían literatura porque en su época y su medio ese era el mejor, si no el único, medio de señalar los males sociales, zaherir a los regímenes dictatoriales y difundir ideales de renovación”. Sus ideas,

destiladas por las circunstancias concretas de América Latina, provenían de una mezcla ideológica cuyas fuentes podían encontrarse con distintos pesos y contrapesos en el romanticismo europeo, el “socialismo humanitario” de Pierre Leroux, el “catolicismo social” de Félicité de Lamennais (1782-1854) y el sansimonismo. Pero también en las ideas de Mazzini y su exaltación de la patria que transcendía el atávico lugar de nacimiento para definirla en términos de una comunidad de ciudadanos que compartían un elemental e imprescindible “nivel espiritual y material”. Sus formulaciones en relación con el cambio social no siempre eran concretas y aunque defendían una “filosofía específicamente americana”, como hacía el eminente Juan Bautista Alberdi (1810-1884), su inspiración no se hallaba en el pasado amerindio ni en el español, sino en el poderosísimo arquetipo de la civilización estadounidense (Pena de Matsushita, 2009; Tovar González, 2009). Como dijo sin rodeos el segundo mandatario de las presidencias históricas que instrumentaron el orden nacional argentino, Faustino Sarmiento: “Alcancemos el estado de desarrollo de los Estados Unidos”. El político e historiador boliviano Alcides Arguedas Díaz, haciéndose eco de la visión psicologista y supremacista de Gustave Le Bon, escribió en *Pueblo enfermo* (1909) que, si bien los “primeros legisladores, con Bolívar y Sucre a la cabeza, eran seres inmensamente superiores a su época y al medio, y dictaron una constitución adaptable a su poderosa mentalidad y, sobre todo, a su alto ideal de justicia y democracia” [...] ese fue, quizá, “su error, porque constituciones de esta índole necesitan una sólida base de ideal político, y nuestro pueblo no tenía ninguno” (Arguedas Díaz, 1909, p. 207).

Sin embargo, diversos acontecimientos durante los primeros años del siglo XX alteraron radicalmente la política y el pensamiento intelectual a nivel continental. La intervención del primer Roosevelt en Panamá, país arrebatado a Colombia y transformado en una “dependencia estadounidense que conectaba ambos océanos”, el saqueo de México, la anexión de Hawái, las matanzas de filipinas, junto a las revoluciones mejicana y rusa, contribuyeron a estimular un furibundo y justificado antimperialismo, pero también una mirada introspectiva de los seculares proble-

mas de la región. Los teóricos latinoamericanos comenzaron a criticar el mundo exterior al mismo tiempo que buscaban soluciones “específicamente latinoamericanas” (Anderson, 2014, p. 12; Hirschman, 1961/1963, pp. 21-24). Desde los primeros años del siglo pasado el dominio prácticamente absoluto del capitalismo norteamericano, con un volumen industrial superior al de Alemania y Gran Bretaña juntas, se ajustó con la poderosísima influencia del darwinismo social en el plano internacional y con su consecuencia inevitable, la formación de una fuerza militar y naval que lo convertirían en la potencia hegemónica de lo que quedaba de siglo. Frente a esta dinámica del “nuevo imperialismo”, el marxismo latinoamericano del período de entreguerras actuó como faro intelectual creativo y revolucionario. Sus militantes defendieron simultáneamente el socialismo, la democracia y un ferviente antiimperialismo. “La emancipación de la económica del país solo es posible por medio de la acción de las masas proletarias” -escribía Mariátegui en sus “principios programáticos del Partido Socialista”- pero esta solo sería posible, concluía lacónicamente, a través de la acción conjunta y solidaria de lucha global contra el imperialismo (Löwy, 2007). ¿Podría, acaso, una crisis mundial crear las condiciones necesarias para que las clases explotadas y oprimidas del continente hicieran realidad las esperanzas del genio peruano? La Gran Depresión, sin duda, contribuyó a provocar un cambio drástico en la política económica mundial y particularmente en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Pero, lógicamente, la diversidad regional implicó que la crisis tuviera un peso relativo dependiendo de viejas tendencias y factores coyunturales. Así, por ejemplo, las reformas cardenistas del México de los años treinta aunque “recibieron el estímulo parcial de la depresión mundial” no habrían sido posibles sin el precedente terremoto revolucionario y las “expectativas” que aquel produjo. Aún más, desde una perspectiva *longue durée*, la urbanización, las presiones demográficas o la industrialización fueron tendencias continentales aceleradas por la crisis mundial, pero “jamás fueron iniciadas *ex novo*; si su efecto fue de aceleración o retraso es una cuestión empírica cuya respuesta varía, según el caso, de un país a otro” (Knight, 2015, pp. 276-349). Quizá la principal consecuencia política de la Gran Depresión fue el auge

del “populismo”, término vago como pocos, aunque más claro en la región, formado en torno a movimientos obreros organizados y aliados con el capital que emplearon todas sus fuerzas para “arrebatar el poder a las élites terratenientes tradicionalmente orientadas hacia las exportaciones” (Hartlyn y Valenzuela, 1997). A diferencia de las democracias de talla única neoliberales que surgirían en la práctica totalidad de Occidente durante los años ochenta, el populismo latinoamericano de este periodo no solo conllevó una “ampliación” de la “participación de la organización política popular”, controlada por líderes autoritarios, sino que casi siempre coincidió (en algunos casos aceleró) con periodos de “expansión dinámica de la economía doméstica” (O’Donnell, 1993). Sin embargo, durante los años treinta ni se produjo una voladura total del régimen exportador, ni el populismo se instituyó como el único sistema político continental. En Argentina, Brasil, Perú y Cuba, por ejemplo, se establecieron regímenes autoritarios, mientras en otros lugares como Centro América, aunque no exclusivamente, se fortalecieron gobiernos militares (Mazower, 2017; Drinot y Knight, 2015; Löwy, 2007). Pero a pesar de que la región siempre constituyó un heterogéneo conjunto de economías y regímenes políticos, durante los turbulentos años treinta aquellas diferencias convergieron hacia lo que la mayoría de los intelectuales y clases dirigentes veía como un posible futuro de transformación social y económica.

“¿Les trente glorieuses en América Latina?”

La conducción económica pasó a estar dirigida por políticas gubernamentales que intentaron corregir racionalmente las consecuencias de la crisis que se habían transmitido, como era de prever, a través del principal motor del crecimiento económico de la región, el sector externo. La recuperación, sin embargo, no conllevó un vínculo inevitable y dependiente del “modelo de crecimiento basado en la exportación”, ni tampoco supuso la construcción de una ineficaz “economía semicerrada”. Se trató de un fenómeno transcontinental durante el cual se resucitó el *locus classicus* del capitalismo de Estado, imprimiendo un giro en las tendencias de los mercados “autorregulados”. Los años treinta esti-

mularon una “creatividad casi furibunda”, escribió Díaz-Alejandro con respecto a la *intelligentsia* latinoamericana; “las autoridades antiguas y las reglas de la política económica anterior quedaron descartadas” (Díaz-Alejandro, 1988, pp. 67-68). De hecho, durante aquellos años se desarrollaron las bases teóricas y políticas para impulsar la transición hacia un crecimiento económico basado en la industrialización. Así, refutando la teoría clásica del beneficio mutuo del comercio internacional, Raúl Prebisch y Hans Singer argumentaron (simultánea pero independientemente en 1950) la hipótesis contraria, a saber, la propensión secular de los “términos de intercambio” tendía a deteriorarse para los países productores y exportadores de materias y productos primarios e importadores de manufacturas (Carrillo García, 2019, p. 76). Prebisch, el Keynes argentino, señaló acertadamente en 1949 que a pesar de las diferencias regionales existía un patrón común de desarrollo: la región continuaba en los márgenes del sistema económico mundial como suministradora neta de “materias primas y alimentos”. ¿Cómo podía escapar de aquella condición de subordinación? La industrialización, una tarea que Prebisch “propuso como si fuera universalmente manejable”, solo precisaba de “capital, espíritu de empresa y promoción o protección por parte del Estado” (Hirschman, 1987, p. 777). Había nacido la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Teóricamente se trataba de una acertada impugnación del modelo de desarrollo volátil y dependiente que caracteriza a las economías excesivamente especializadas en la producción de un número reducido de materias primas y una industria débil o inexistente. Pero para conseguir reestructurar la economía y limitar la dependencia del sector externo era evidente, como sigue siendo, que el mercado “autorregulado” no era la respuesta. Por ello, no fue fortuito que surgieran tensiones y contradicciones entre ideologías políticamente irreconciliables. La defensa que hacían políticos y economistas tecnócratas de una industrialización promovida por el Estado era vista desde la perspectiva de los intereses estadounidenses y de sus homólogos conservadores en la región como un problema y una amenaza al correcto orden del mundo. Aunque estos últimos argumentaban en contra de las injerencias estatales con criterios típica-

mente técnicos, como, por ejemplo, una “mala asignación de recursos”, desequilibrios en la balanza de pagos y “búsqueda de rentas”, lo cierto es que la idea subyacente no era otra que el deseo irrefrenable de regresar a las políticas de mercado que habían sido interrumpidas durante la Gran Depresión. Pero las críticas a la industrialización también se hallaban entre las voces de la izquierda que veían en ella una poderosa fuerza de transformación, aunque destinada únicamente a abastecer de bienes y servicios a las “clases altas y medias”, excluyendo en cambio a la mayor parte de la población (Hirschman, 1987, p. 778).

Al menos hasta los años setenta, o más preciso hasta finales de la década de 1960, la región sufrió un proceso de industrialización suficientemente estable y activo. De hecho, si Occidente tras la segunda posguerra iniciaba sus singulares “años dorados”, dada la cruenta ferocidad con la que penetraría en América Latina la ortodoxia neoliberal durante la década perdida de 1980, Hirschman pudo afirmar retrospectivamente que quizá la región había disfrutado de sus propios *trentes glorieuses* (Hirschman, 1987). Económicamente, el crecimiento industrial dirigido por la burocracia estatal de los años cuarenta y cincuenta produjo una serie de cambios tan considerables que la “industria y el PIB real en muchas repúblicas fueron capaces de orientarse en la dirección opuesta a la exportación de bienes primarios” (Bulmer-Thomas, 2002, pp. 243-286). Tendencias que se prolongarían con el apogeo del comercio internacional de los años sesenta, estimulando así la diversificación de las exportaciones de la región e incentivando el crecimiento eficiente de exportaciones manufacturadas, especialmente en países donde el modelo de industrialización se había constituido más sólidamente, como fue el caso de México, Brasil y Argentina, pero también en países más pequeños como Chile y Uruguay (French-Davis, 2002, p. 324; Thorp, 2002). Considerando en su conjunto los programas ISI, “con todos sus problemas” y tonalidades regionales, entre otros efectos generaron una de las mayores tasas de crecimiento económico en la mayoría de los países latinoamericanos, al menos durante los decenios 1950 y 1960. Así, mientras los estudiosos de la teoría de la dependencia cargaban los demonios del subdesarrollo

de América Latina principalmente sobre la hegemonía estadounidense, cuyas razones y argumentos como veremos no eran en absoluto caprichosos, durante ese mismo periodo (para ser preciso entre 1950 y 1980) la “productividad por hora trabajada” en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela “creció a una tasa promedio anual real del 3,1 por 100”; una magnitud sin precedentes en el registro histórico de la región que la situó en el tercer lugar con mayor crecimiento de productividad del mundo. Las tendencias económicas estaban mostrando que el capitalismo periférico no iba a colapsar “bajo su propio peso”, tal como predicaban con frecuencia los emocionales “dependentistas” (Palma, 2014; 2002). Sin embargo, había sólidas razones y suficientes datos empíricos para confirmar que la prosperidad se distribuía restringidamente.

Durante los quince años que transcurrieron entre 1950 y 1965 la población latinoamericana había pasado de 167,3 a 250,7 millones de habitantes; en 1980 se había multiplicado por algo más del doble con respecto a 1950 alcanzando los 362,2 millones. Los efectos combinados de esta expansión poblacional vegetativa con el deterioro de las condiciones de vida rurales y el auge de la industrialización, produjo la expulsión de un número considerable de campesinos “fugados del campo” hacia la frecuentemente desordenada urbanización que se apilaba y distribuía en forma de conurbaciones paupérrimas. Las décadas centrales del siglo XX vieron proliferar los términos “chabola”, “villas miseria” y “favelas” que acabaron siendo territorios indefinibles, incontrolables y anárquicos en el interior o en los extrarradios de las ciudades del continente. La población urbana había superado por primera vez a la rural en algo más de seis décimas hacia 1970; al final del siguiente decenio el 65,5 por 100 residía en centros urbanos, o así considerados por los censos (CEPAL, 2005, pp. 13 y 27 cuadros 1, 11). Inevitablemente, surgieron tensiones sociales y desequilibrios regionales. La urbanización visibilizó mucho más la inveterada y extendida pobreza y, sin duda, “la eficacia del Estado para corregir estos efectos secundarios del crecimiento económico distaba mucho de ser satisfactoria”. Entre 1950 y 1981 el comportamiento económico en general crecía a una tasa anual promedio del 5,3 por

100, sin embargo, el ingreso per cápita lo hizo en torno a 2,6 por 100, lo que ejemplifica las enormes desigualdades y la terca exclusión “en la distribución de los beneficios del crecimiento económico en toda América Latina: desigualdades entre los grupos sociales, entre las áreas urbanas y rurales, entre las regiones de cada país y entre los distintos países” (French-Davis *et al.*, 2002, p. 323; Carrillo García, 2017:203-204). Así lo vio también Hirschman: “la información referente al crecimiento económico, el aumento de los ingresos per cápita, los avances de la industrialización y la elevación de las clases medias, se mezclaba indisolublemente en América Latina con tendencias y percepciones contradictorias” (Hirschman, 1987, p. 770-771). ¿No se basa, en todo caso, el desarrollo del capitalismo en una dinámica de contradicciones, crisis y violencias permanentes y soluciones coyunturales? En algunos países las tasas de mortalidad infantil y analfabetismo sufrieron un descenso pronunciado. Si en torno a 1950 probablemente la mitad de la población era analfabeta, excluyendo a los países del Cono Sur, dos décadas más tarde esa cifra se había reducido a un 26 por 100. Así, mientras el analfabetismo alcanzaba en 1970 al 26,5 por 100 de los mejicanos, en Argentina afectaba a un tímido 7 por 100 de su población. En todo caso, la heterogénea realidad latinoamericana era, como es, mucho más compleja y difícil de interpretar. Allí donde la población no hablaba la lengua oficial del Estado, especialmente en las repúblicas andinas donde las lenguas vernáculas habían sufrido un secular proceso de exclusión, su población no solo era considerada erróneamente como analfabeta, sino que años después en plena explosión de las políticas neoliberales surgirían interlocutores que hablaban, o decían hablar, por las comunidades indígenas para formular frecuentemente sus propios intereses (Guerrero, 1996). El espíritu del positivismo nunca abandonó la región. En cualquier caso, durante la fase desarrollista continental el objetivo común era entrar *rápidamente* en el secular camino de la “modernización”, con independencia de que se tratara de gobiernos militares, revolucionarios, civiles o burócratas, todos anhelaban quebrar los obstáculos que impedían el desarrollo de sus respectivas naciones. Por supuesto, su retórica política podía ser populista, socialista o nacionalista, pero ante

todo aprovecharon la quiebra de la economía mundial en 1929 para desarrollar políticas proteccionistas que hicieran menos vulnerables a sus economías frente a la volatilidad de los precios y la dependencia de un reducido número de productos primarios dirigidos a los mercados internacionales. ¿Quién, de no ser las autoridades estatales, podría garantizar unos mínimos vitales para toda la población, contrarrestando al mismo tiempo la secular tendencia hacia la desigualdad que había vivido la región en comparación con el Atlántico Norte? Económicamente, la fase de industrialización no fue un simple espejismo evocado retrospectivamente por los nostálgicos del pasado, aunque, sin duda, adoleció de ciertos problemas estructurales.

Con demasiada frecuencia las políticas proteccionistas destinadas a promover nuevas industrias no sufrieron alteración alguna. Se superponían capas de protección a las antiguas, lo que tuvo como consecuencia un “patrón geológico de protección” que sería uno de los aspectos característicos del modo de “industrialización” estatal latinoamericano. El proteccionismo de un sector no era visto como un proceso coyuntural sino como una “conquista permanente” (Bértola y Ocampo, 2010, p. 178). De ese modo, una combinación de distorsión política de los mercados, empresarios frecuentemente volcados a la obtención de rentas fáciles y gobiernos corruptos, impidió que la industrialización fuese más allá de un limitado horizonte cuando su “vida útil” había finalizado (Palma, 2022, p. 967). Además, el fomento de la industria tuvo un sesgo marcadamente anticampesino, un aspecto central que diferenció a la región del extraordinario éxito de los tigres asiáticos que pronto ocuparían el centro de gravedad de las manufacturas globales. Así, mientras el resultado de las reformas agrarias de las décadas sesenta y setenta en América Latina fue claramente insuficiente, cuando no decepcionante desde cualquier perspectiva (distributiva, técnica y jurídica); por el contrario, el despegue de las economías de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y más recientemente China, se basó en un grado de compromiso estatal con “políticas de comercio altamente selectivas”, reformas agrarias y fiscales. Factores que actuaron como corredores de relevos para

acelerar la modernización de las bases agrícolas e impulsar los sectores manufacturero y comercial. No cabe duda de que estos países asiáticos se habrían convertido antes o después en grandes potencias económicas, sin embargo, la protección estratégica de Estados Unidos durante la Guerra Fría que los consideraba demasiado lejos de Washington pero muy próximos a las tentativas del frente revolucionario maoísta, contribuyó a calentar su motor económico. Esto significó en países todavía predominantemente rurales, entre otros aspectos, que el campo no cayera peligrosamente por debajo de las ciudades (Anderson, 2010, p. 86-87). En América Latina por el contrario las reformas agrarias no solo facilitaron en cierto modo un proceso de concentración de tierras y capital al debilitar el poder de la clase terrateniente tradicional, sino que precisamente por ello cuando se produjo el giro neoliberal los pequeños productores fueron cada vez más una variable excedentaria del mercado activo de tierras (Kay, 2015, p. 75).

Por otro lado, la Guerra Fría estimuló la violencia y la energía letal en todo el hemisferio al sur de río Bravo. Desde sus inicios en 1948 hasta su finalización con el derrumbamiento soviético, Estados Unidos derrocó por lo menos a veinticuatro gobiernos latinoamericanos; cuatro de ellos mediante el uso directo de la fuerza militar norteamericana, diecisiete alentando a las fuerzas militares o políticas domésticas para que intervinieran sin la acción directa estadounidense, por norma general a través de un *coup d'état*; y, al menos, tres derrocamientos estuvieron dirigidos directamente por la CIA. ¿Cuál fue el precio humano de este realismo trágico latinoamericano? La Operación Cóndor acumuló violencia, asesinatos y resentimiento para el resto del siglo. Entre 1960, año en el que los soviéticos desmantelaron el sistema gulag del régimen estalinista, y el fin del imperio soviético, las “cifras de prisioneros políticos, víctimas de torturas y ejecuciones de disidentes políticos no violentos en América Latina excedió con mucho a las de la Unión Soviética y los Estados satélites de la Europa del Este”. En el periodo citado el “bloque soviético en su totalidad fue mucho menos represivo, si se mide en términos de vidas humanas, que muchos países latinoamericanos individuales”

(Coatsworth, 2010, cit. Anderson, 2014, p. 111). La conclusión inequívoca es que durante toda la Guerra Fría el Tercer Mundo se convirtió en un campo de batalla de guerras calientes e intervenciones militares, explícitas o encubiertas, entre soviéticos y norteamericanos por controlar el espacio geopolítico, con consecuencias desastrosas para los países situados en los márgenes del mundo. Los problemas, sin embargo, no se limitaban al cálculo irracional de la Guerra Fría.

Regresiones sucesivas

Entre finales de 1960 y principios de la siguiente década una serie de factores contribuyeron a debilitar las tendencias positivas del crecimiento económico y hacer del Estado un instrumento político del mercado y de las finanzas globales. En aquel momento los bancos de inversión estadounidenses, de Europa Occidental y Japón se encontraban inundados de petrodólares procedentes de los países del Golfo; exasperados por hallar nuevas fronteras de “inversión en una época en la que el potencial” de hacer negocios rentables en Estados Unidos estaba agotado, se entregaron a prestar de forma masiva a países de la periferia, tales como México, Brasil, Argentina, Chile, o Polonia. Pronto las tensiones se hicieron sentir cuando estalló la crisis de la deuda externa en 1980. Algo más de cuarenta países fundamentalmente latinoamericanos y africanos tuvieron que afrontar serios problemas para hacer frente a sus deudas cuando Paul Volcker, recién nombrado presidente del Banco de la Reserva Federal (FED) por la administración Carter (1977-1981), elevó los tipos de interés a alturas sin precedentes a partir de 1979 (en julio de 1981 alcanzó la cima del 19,8 por 100). La decisión neoconservadora de atacar la inflación con la subida de los tipos no solo provocó la destrucción de empleo, empresas y sindicatos en Estados Unidos, también benefició a los titulares de capital financiero y dejó a los países endeudados del Tercer Mundo bajo la hegemonía del dólar estadounidense. Puede que el camino fuera espinoso pero el objetivo era claro. Los animales rentistas lograron satisfacer su reprimida aversión contra el keynesianismo y fortalecieron su poder a través de la progresiva liberalización normativa

que destruyó las restricciones que se habían impuesto a las actividades financieras desde los años treinta. Ahora, una vez más, y por usar un paralelismo con los “felices años veinte”: “los más ricos se enriquecían mucho más deprisa que los pobres dejaban de serlo” (Harvey, 2016; Carrillo García, 2023; Galbraith, 1976, p. 32). Finalmente, el anhelado deseo a instancias de Washington de convertir a los países al sur de río Bravo en clientes había sido consumado. Los “prestatarios latinoamericanos fueron cortejados por los prestamistas” y guiados por “la vía del jardín” tras la cual se les suministró el *Volcker shock* “de las tasas de interés rápidamente crecientes” (Hirschman, 1987, pp. 799-803). Durante aquel infame episodio se produjo un retroceso del “121 por 100 de promedio del PIB per cápita mundial al 98 por 100, y del 34 al 26 por 100 del PIB por habitante de los países desarrollados”. Las instituciones supranacionales actuaron en defensa de los intereses especulativos de los acreedores, reduciendo a los países a variables de ajuste que debían cumplir con la servidumbre de la deuda. La región fue sin duda la “víctima” propiciatoria de una estrategia de la solución de la crisis, no sólo de la deuda interna, también de la “crisis bancaria estadounidense” (Ocampo, 2014, p. 40). Las consecuencias fueron realmente dramáticas y demostraron, además, las profundas brechas e interrelaciones que había entre el Primer Mundo y los países de la periferia.

En primer lugar, aquellos acontecimientos despejaron la pista ideológica para la penetración continental de los regímenes neoliberales, con los precedentes experimentales de Chile (1973) y Argentina (1976), lo que sin duda cambiaría drásticamente la política latinoamericana. De hecho, en el primero de ellos la escuela de Chicago con Milton Friedman a la cabeza y sus fieles reaccionarios chilenos llevaron a cabo el asalto monetarista más enérgico de la historia de la región con la privatización del Estado, la represión política y social, así como una reversión de las políticas sociales reformistas, mostrando de ese modo “el lado inquisitivo de la economía de libre mercado” (Hudson, 2012, p. 25). En Argentina, como le dijo un oficial de la Marina al periodista Jacobo Timerman poco tiempo después de que los militares se hicieran con el

poder el 24 de marzo de 1976: “Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones”. Aunque el militar estaba barajando la cifra de 20.000 víctimas, finalmente sus sanguinarias expectativas fueron superadas. El despiadado régimen neoliberal asesinó a diez mil personas más, entre los cuales hubo medio millar de niños y niñas (Ginzberg y Dandan, 2021). Sin embargo, no podemos separar lisa y llanamente la cuestión de las políticas monetarias impuestas con mano de hierro en ambos países del reciclaje de petrodólares que los banqueros occidentales decidieron “comercializar” con “toda la energía y la determinación de que eran capaces”. Solo bajo la presión de estas circunstancias particulares Chile y Argentina pudieron “sostener” la sobrevaluación de sus monedas y los grandes déficits resultantes en sus balanzas de pagos” durante un tiempo. No se trata de subestimar la crueldad social y política de las dictaduras apoyadas desde la sala de mandos anticomunista de Estados Unidos, o el fracaso abrumador de la “ortodoxia monetarista”, pero como dijo Hirschman la autonomía interna de ambos países dependía del sistema financiero global en mayor medida de lo que había sido considerado por sus críticos (Hirschman, 1987, p. 781). Y no solo eso. Cada vez era más evidente que allí donde el *doux commerce* y la ortodoxia monetarista no podían actuar con “libertad”, la mano visible y violenta de los regímenes militares despejaba “el camino para aplicar políticas neoliberales”. ¿Cómo, si no, se pudo llevar a cabo una “venta al por mayor” de los patrimonios industriales nacionales, dilatada mucho más notablemente durante las dictaduras en Chile y Argentina, y en menor medida en Uruguay, sin debilitar cuando no hundir “la capacidad del pueblo para defender sus intereses”? Los tres países citados habían alcanzado éxitos considerables, tenían amplios sistemas de protección social y habían generado una importante actividad en la expansión de los mercados domésticos, satisfaciendo así el “bienestar social de la población” a través de la prestación de servicios públicos (Sader, 2008). La “liberalización total” de las economías chilena (que mantuvo un crecimiento menor del 1 por 100 per cápita entre 1974-1989), mejicana (después de 1985) o Argentina (1991), desencadenó la aniquilación a un mismo tiempo de “sectores débiles” como potencialmente fuertes y, sin

duda, conllevó un “gran costo social durante un largo periodo de tiempo” (Shaikh, 2007, p. 62).

En segundo lugar, la FED y el Tesoro de Estados Unidos llevaron a cabo una “estrategia integral” con la finalidad de expandir drásticamente la dirección del “riesgo interbancario de pago” y asegurar la condicionalidad de los préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) “a cambio de programas de ajuste estructural”. ¿Cuál era el secreto de esta estrategia? Las prioridades e intereses financieros debían anteponerse a cualquier otro cálculo político (Panitch, 2013). De hecho, las políticas ultraliberales fueron adoptadas como una nueva “religión económica” por las clases capitalistas domésticas que pronto se valieron de las ventajas que ofrecía la nueva situación internacional. Aprovecharon el potencial reformista contenido en las ambigüedades neoliberales y celebraron la epifanía de “libre mercado”, la privatización y la inversión extranjera privada; al mismo tiempo que rechazaron los “mercados domésticos” y las políticas proteccionistas e industriales del pasado desarrollista (Hirschman, 1987; Panitch, 2013). El capital financiero global, el aparato burocrático estatal y las clases capitalistas, con diversos pesos y contrapesos, formaron un *ménage à trois* que selló el destino neoliberal de la región. La impresionante neoliberalización de gran parte de la izquierda posmoderna y de notables sectores intelectuales no contribuyó precisamente a romper la dinámica irracional del credo neoconservador. De hecho, gran parte de sus críticas iban dirigidas básicamente contra las incontrolables e imprecisas fuerzas de la globalización que, según el criterio más común, habían debilitado el aparato estatal limitando severamente sus competencias. Las cosas, sin embargo, fueron muy distintas. Así, cuando a principios de la década de 1980 los regímenes neoliberales chileno y argentino estaban sufriendo una combinación de drástica devaluación del tipo de cambio y un incremento de las tasas de interés de la deuda internacional, provocando con ello que el costo de los préstamos fuera insoportable, el Estado, en contra de los principios neoliberales, actuó como prestamista de último recurso evitando la quiebra de grandes empresas y de los sectores bancarios, abandonando a los pequeños negocios a su suerte (Hirschman, 1987). Por

simple enumeración diacrónica y geográfica, la crisis de la deuda de la década de 1980 que afectó a casi todo el Tercer Mundo, el cataclismo del mercado de valores en 1987, la abrupta crisis en el México de 1994, la crisis asiática de 1998 que pronto se contagiaría a través de los mercados globales al resto del mundo, la Gran Recesión de 2008 que parecía evocar los turbulentos años treinta, o la crisis pandémica de Covid-19; en todas ellas se puso de manifiesto lo “duro que resultaría para los capitalistas” si este mundo estuviera “poblado” por Estados mínimos, o “sin ningún tipo de Estados”. Las crisis hacían que los ejecutivos financieros del Mundo Libre y del Libre Mercado se postraran rápida e incondicionalmente ante la democracia del Estado soberano para cobrar de la ciudadanía política los excesos de sus orgías económicas, incluso lo hacían con más aquiescencia que la que habían mostrado los burócratas soviéticos ante las directrices del Gosplán. La afirmación de Reagan de que el “gobierno no es la solución, sino el problema” no conllevó en ningún caso el debilitamiento y mucho menos la abolición de la capacidad de las autoridades públicas para ejercer el poder sobre sus campos de jurisdicción; al contrario, la prolongación de la potestad de *Leviathan* en todo el mundo, *pari passu*, superó las expectativas keynesianas, transformando progresivamente el espacio colectivo de la ciudadanía en un mercado de clientes de gestión empresarial y parálisis burocrática de estilo hayekiano (Panitch, 2000; Carrillo García, 2023).

Tercero, en términos generales el vigoroso crecimiento económico que había caracterizado a la región durante el periodo de 1950-1981 quedó estancado entre el último año citado y 1990, no superando el 1,3 por 100. El Consenso de Washington no solo supuso un fracaso completo desde cualquier perspectiva social, sino también en su objetivo más estrecho de promover el crecimiento económico. Y no era necesario ofrecer argumentos demasiado complejos o elaborados. La conversión a la nueva fe era incondicional. Cuando Gustavo Franco, un desertor de la economía heterodoxa y director del Banco Central de Brasil bajo el primer gobierno de Cardoso (1995-2002), fue interrogado sobre sus motivaciones neoliberales respondió lisa y llanamente: “en Brasil en ese

momento la elección [era] entre ser neoliberal o neidiota [neoburro]” (Palma, 2014; Stiglitz, 2003; Carrillo García, 2022, p. 166). Paradójicamente las reformas económicas de perfil neoliberal fueron adoptadas “con mayor profundidad y rapidez” en países que en el pasado habían liderado las curvas de crecimiento económico cimentado en la industrialización. Como consecuencia Brasil, Argentina y Uruguay, así como el caso extremo y fulminante del Chile pinochetista y más tarde Perú y Colombia sufrieron un proceso dual de “desindustrialización prematura” y posición de tipo “ricardiana pasiva” en el tablero internacional (Palma, 2019, p. 926). Por su parte, la economía mejicana, especialmente en su frontera norte, y la mayor parte de Centroamérica “tomaron la ruta de la maquila”, es decir, trabajos con escaso valor agregado y donde el riesgo humano, las sustancias tóxicas o los accidentes eran, como siguen siendo, comunes en la amarga experiencia cotidiana de hombres y mujeres, sin que ello haya constituido un “objeto de regulación” o despertado la amodorrada conciencia de las autoridades públicas (Harvey, 2007, p. 186). Por tanto, y al igual que en el periodo anterior a la crisis de 1929, el crecimiento económico quedó condicionado a las permanentes volatilidades del sector primario. La casi totalidad de las repúblicas latinoamericanas, aunque con oscilaciones diferentes, reorganizaron la economía política siguiendo las disposiciones neoliberales no para responder a las “necesidades del sistema en su conjunto”, sino con la finalidad de cubrir las “demandas a corto plazo de los sectores clave del capital” y la devolución de la deuda externa (Davidson, 2018; Gudynas, 2004). Como veremos la tendencia a reorientar el crecimiento económico en la dirección opuesta a la industrialización fue mucho más espectacular durante los primeros años del siglo XXI.

En cuarto lugar, y como consecuencia del giro económico descrito, mientras la riqueza ascendía hacia la cúspide neoliberal de la estructura social, “el dinero como carnicero de todas las cosas, como Moloch al cual todo es sacrificado” (Marx, [1857/1858] 2007, p. 133), produjo una infame estela de pobreza y miseria continental. Si en 1980 el número de pobres podía estar en torno a 136 millones, diez años más tarde aquella

vergonzosa cifra se había elevado hasta alcanzar los 204 millones (Lavinias, 2014). La desindustrialización produjo un asombroso crecimiento de la economía informal y del desempleo generalizado y estructural entre los hombres que, en buena medida, y de forma inevitable, se vieron forzados a emigrar. Esta situación hizo que las mujeres buscaran “el sustento como trabajadoras a destajo, vendedoras de licores y lotería, en la venta ambulante y en oficios varios como peluqueras, costureras, limpiadoras, recogedoras de trapos, mineras y prostitutas”. El ilotismo dominaba el mundo. He aquí “la variable secreta y culpable de las ecuaciones neoclásicas del ajuste económico”, afirmó con la debida causticidad Mike Davis, “se espera que las mujeres pobres y sus niños carguen sobre sus espaldas con el peso de la deuda” (Davis, 2014, pp. 203-209). En la práctica totalidad de la región “la obligada austeridad que impusieron los Planes de Ajuste Estructural” desde la década de 1980 debilitó considerablemente “la inversión pública en sanidad y agua potable, acabando con el descenso de mortalidad infantil que se producía en aquel momento”. Así, por ejemplo, en México, después de la puesta en práctica del “segundo Plan de Ajuste en 1986, el porcentaje de nacimientos atendido por personal sanitario cayó del 94 por 100 de 1983 al 45 de 1988, mientras la mortalidad entre las mujeres en el parto se disparó del 82 por mil en 1980, al 150 en 1988”. Dado que los teóricos neoliberales, así como sus paladines políticos se oponían con vehemencia a cualquier proyecto social colectivo, las políticas agrarias estuvieron marcadas por un enérgico énfasis en la “privatización, descolectivización y el registro y titulación de tierras”. Para llevarlo a cabo se recurrió, naturalmente, al “imperio de la Ley”. No fue fruto de la coincidencia que, en 1992, año infame de la política mejicana, el gobierno modificara el artículo 27 de la Constitución de 1917 cuyas líneas no solo legitimaban la soberanía popular fundamentada en el derecho de propiedad funcional a los bienes comunales, sino que habían inspirado a las constituciones soviética de 1918, la de Weimar un año después, o la española de 1931 (Domènech, 2019). Como consecuencia el camino hacia la privatización y la venta especulativa de tierras quedó despejado. A nivel continental y en términos generales las políticas de ajuste estructural desplazaron la inversión

pública hacia los sectores privados, y aunque fue a un “ritmo desigual”, lo rápido de su avance puede ilustrarse una vez más con el ejemplo mexicano. Carlos Slim, “el industrial más maligno de México”, valiéndose de sus amistades políticas se lucró con las privatizaciones estatales durante la década de 1990. En 2007 “el tesoro de Slim” equivalía “a algo menos del 7 por 100 de la producción total de bienes y servicios de México”; un país en el que según estimaciones del Banco Mundial en 2016 algo más del 50 por 100 de los hogares vivía en el umbral de la pobreza (Porter, 2007; Banco Mundial, 2018). Pero incluso allí donde las decisiones políticas pretendían reorientar la discrecionalidad de la “mano invisible” de los mercados “autorregulados”, las instituciones financieras supranacionales emplearon todo su arsenal ideológico para impugnarlas. Así, cuando a finales de la década de 1990 el Estado chileno decidió usar los recursos económicos ahorrados en un fondo de estabilización, creado en 1985, con el fin de corregir políticas excesivamente procíclicas estimuladas por la bonanza exportadora de cobre, el FMI insistió en que no lo hiciera, basando su argumento en que se trataba de un “gasto deficitario” (Stiglitz, 2016). Como consecuencia, la economía chilena sufrió un acusado descenso del crecimiento, pero también un espectacular incremento de la concentración de riqueza económica y de poder político que, al escribir esto, detentaba un minúsculo 1 por 100 formado por élites empresariales que se apropiaban de un tercio del ingreso nacional. Aunque las fuerzas del capitalismo global parecían estar al mando de la política doméstica, privatizando todo tipo de protección social, en la práctica sin embargo las autoridades públicas latinoamericanas tenían un margen político para contener la interacción dinámica entre ambos niveles. “Nadie forzó” al estado chileno a “diseñar un sistema de pensiones” en el que sus gestores privados recibían más de 95 por 100 de las cotizaciones, pero solo pagaban “un 15 por 100”, dejando el resto con cargo a los subsidios públicos. Y nadie promovió “más reformas, ni se benefició más de ellas, de las privatizaciones corruptas y del paraíso rentista” que los sectores elitarios domésticos (Palma, 2025, p. 51). Es difícil imaginar una combinación más explosiva. Sin duda, a su debido tiempo, esta dinámica destructiva de la sociedad civil tendría sus respuestas.

¿El fin del neoliberalismo?

A finales de la década de 1990 la política continental parecía estar despertando de su pesadilla neoliberal. El agotamiento de las políticas de ajuste estructural junto con la crisis de la deuda internacional se combinó con un escenario social formado por amplios sectores sociales excluidos de la utopía neoliberal, esto es, clases medias hundidas por la deuda y poblaciones indígenas y marginados en general de un sistema político privatizado y frecuentemente corrupto, aunque nominalmente democrático. “Desde las calles de Buenos Aires a las montañas de Chiapas; desde el altiplano de Bolivia a los *barrios* de Caracas” se produjo una serie de electrizantes enfrentamientos políticos y sociales contra las doctrinas neoliberales. El triunfo electoral de fuerzas políticas progresistas parecía confirmar dicha tendencia. En Venezuela, el desplome de la economía del crudo en 1989 se combinó con una Hacienda pública arruinada y con el hundimiento de las rentas medias, al mismo tiempo que el FMI y la banca internacional exigían una férrea política de consolidación fiscal, ante la cual su presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se inclinó incondicionalmente. Aquellos que se oponían a las medidas de austeridad decretadas por el FMI y ratificadas por el ejecutivo, recibían un castigo ejemplar, tal como sucedió con los manifestantes masacrados que protestaban en la Caracas de 1989. En 1992, con las calles furiosas y “los movimientos políticos paralizados” un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez protagonizaron un fallido golpe militar. En 1998, sin embargo, la democracia llevó al Palacio de Miraflores a Chávez con un 56 por 100 de votos. En aquel momento, en torno a dos quintas partes de la población (el doble de dos décadas antes) vivía en los límites de la miseria, mientras que una décima parte de sus coterráneos disfrutaba de la “mitad de la renta nacional”. La “revolución bolivariana” enarbolada por Chávez pretendía despertar las fuerzas sociales del “pueblo” y transformar drásticamente las instituciones políticas y sociales del país andino “con el mismo espíritu del llamamiento que hiciera el Libertador en pro de una alianza contra la tiranía entre un ejército de salvación nacional y un pueblo

oprimido”. La respuesta no se hizo esperar. En el breve lapso de los primeros dieciocho meses de mandato presidencial se produjo una fuga de capitales que podía alcanzar los 8.000 millones de dólares. A pesar de la leve subida de los precios del crudo, la política continuó atrapada entre un tipo de cambio sobrevaluado, vinculado al dólar y una inflexible “ortodoxia macroeconómica”. *A fortiori*, la política revolucionaria, *ab initio* desaprobada y desafiada por Washington y por los sectores elitarios domésticos, tenía un angosto margen de maniobra para promover el “gasto público o para una redistribución rápida de la riqueza” (Therborn, 2022; Adelman, 2003). En Brasil el régimen neoliberal de Cardoso (1995-2002) al aplicar una guerra ortodoxa contra la inflación provocó una devastación de la “estructura productiva nacional”; llevó a cabo la liberalización de las “cuentas de la balanza de pagos” y la privatización de empresas públicas. El incremento del desempleo, que alcanzó el 11,2 por 100 entre 1999-2002, así como la pobreza que para el mismo periodo afectaba al 27,7 por 100, actuaron como factores electorales para llevar en 2002 al Palácio do Planalto a un antiguo obrero metalúrgico y sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva con una amplia victoria electoral (61,27 por 100 de los votos) (Manzano, 2023). Lula que había fundado el Partido dos Trabalhadores (PT) “como intento de crear una nueva forma de política de la izquierda, más allá de la socialdemocracia y del comunismo soviético” (Sader, 2008, p. 9) no alteró, al menos tal como se esperaba por parte de los sectores progresistas, la dinámica política neoliberal. De hecho, durante el primer mandato de Lula (2003-2011) la política mantuvo un cierto equilibrio entre la consolidación fiscal, la reducción de la pobreza y la exclusión social a base de programas de compensación heredados del gobierno neoliberal de Cardoso, tales como el Programa “Bolsa Família”². En Argentina, Carlos Menem (1989-1999) miembro del Partido

2. Programa social que ha tratado de apoyar a las “familias por debajo del nivel de pobreza con la condición de que sus hijos asistan regularmente a la escuela”, favoreciendo en su conjunto a una población nada desdeñable de 13,6 millones de hogares y 55 millones de personas; a la vez que, directa o indi-

Justicialista, partido de vocación progresista que como la mayor parte de los partidos tradicionales de la región sufrió una crisis de representación y reconstitución de sus bases sociales, se convirtió en un alumno aventajado de las políticas de ajuste estructural. El legado de su predecesor Raúl Alfonsín había dejado al país en una situación de crisis estructural con una tasa de hiperinflación que se había disparado entre abril y mayo de 1989 del 33,4 al 75,5 por 100. La crisis económica precipitó la crisis política y esta a su vez la crisis social. ¿Cuál fue la solución? En una serie de desplazamientos sucesivos con el fin de hacer frente al pago de la deuda externa, se llevó a cabo la privatización de la casi totalidad de empresas públicas al mismo tiempo que se recrudecía la consolidación fiscal y la política tributaria sobrecargaba impositivamente el consumo y los servicios básicos, tales como la luz y el gas, entre otros. El capital privado no tenía émulos a la vista. Pero a pesar de todo, o precisamente por ello, las cosas no mejoraban y la inflación no se enfriaba. Por esa razón, el ministro de economía Domingo Cavallo apretó aún más las tuercas. En abril de 1991 estableció la paridad de la moneda argentina, el Austral, con el dólar estadounidense. Pero la sobrevaluación monetaria del tipo de cambio conllevó un incrementalismo de la financiación internacional con el fin de reequilibrar el “desbalance”. La inflación se redujo drásticamente y el país comenzó un periodo de virtual prosperidad que pronto culminaría en una serie de desastres cuyo clímax estalló durante la odisea de 2001. Una combinación de mercados internacionales inestables, desaceleración de la economía doméstica, devaluación del peso argentino y niveles de desempleo que podían alcanzar al 17 por 100, y ante el temor de que despertara el espíritu de la fuga de capitales, provocó que el ministro Cavallo impusiera férreas medidas antisociales. En un arrebato extremo, las cuentas bancarias fueron bloqueadas (“corralito”) provocando consecuentemente una escalada de violencia política y social, una “guerra civil interna”, que junto al colapso financiero

rectamente, ha contribuido en alguna medida a corregir la acusada exclusión racial en ese país. Véanse (Cecchini y Atuesta, 2017; De la Fuente, 2018).

actuaron como factores perturbadores que llevaron en la Casa Rosada en mayo de 2003 al peronista Néstor Kirchner. La izquierda había regresado al país del Cono Sur. Las políticas de Néstor pusieron a trabajar la maquinaria estatal en favor de la ciudadanía, implementando políticas macroprudenciales y estabilizando el país; la deuda fue reestructurada en algo más del 60 por 100, se incrementó el empleo y el superávit comercial; y parte del PIB se destinó a programas para recomponer el fracturado tejido social. Sin embargo, las políticas demostraron ser insuficientemente sólidas y “cortoplacistas” (Minor y Reich, 2021).

En la Bolivia de mediados de los años ochenta la economía se hallaba en un estado de crisis abrumador. Ante la rampante hiperinflación y las obligaciones de la vasta deuda contraída con el FMI, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) dejó en manos del ministro de planificación Gonzalo Sánchez de Lozada el timón de la economía. El plan de Lozada, como el resto de respuestas autoritarias de la región, consistía en aplicar rápidamente las políticas de ajuste estructural, cuyas dramáticas consecuencias sufrieron en primer lugar las clases populares formadas por campesinos fugados del campo hacia los tugurios urbanos o mineros despedidos. La consolidación fiscal detuvo en seco los subsidios gubernamentales, “congeló los salarios y eliminó decenas de miles de empleos”; vinculó la economía boliviana a la hegemonía del dólar estadounidense y dejó las puertas abiertas del mercado doméstico al eliminar las “cuotas de importación”. Años más tarde, en 2003, la deficiente gestión del régimen neoliberal ante nuevos hallazgos gasísticos provocó la exasperación de las clases populares contenida durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora los principales rivales sociales y políticos del *establishment* no eran ya los partidos de izquierdas tan combativos durante las décadas de 1970 y 1980 formados por cuadros de la Central Obrera Boliviana, campesinos y mineros; eran los indígenas aimaras, secular y racialmente excluidos de la política nacional. Así pues, hombres y mujeres de estas comunidades unidos a las clases subalternas sumidas en la economía informal y en una terrible precariedad, así como grupos de estudiantes e intelectuales hastiados por la corrupción

y las políticas draconianas de austeridad expulsaron del gobierno a Sánchez de Lozada que huyó a Miami. En junio de 2005 ante las presiones sociales progresistas por la nacionalización de los hidrocarburos y las resistencias derechistas, “entre 400.000 y 500.000 manifestantes, en su mayoría de ascendencia aimara, bajaron en tropel desde El Alto hacia el corazón de la capital”; las costuras de las autoridades reaccionarias estaban rotas y en diciembre de ese año se convocaron elecciones que condujeron democráticamente al Palacio Quemado al indio y antiguo sindicalista cocalero aimara Evo Morales (Thomson *et al.*, 2018; Therborn, 2022). Aprovechando la explosiva demanda del mercado externo de materias primas, el motor económico boliviano alcanzó un promedio del 5,8 por 100 entre 2011 y 2014. Al mismo tiempo, el compromiso político del gobierno progresista de Morales con la reducción de la pobreza y la nacionalización de los recursos naturales provocó por primera vez en la historia del país andino que el crecimiento se tradujera en alteraciones cualitativas de la vida de la mayor parte de la gente. Si a principios de siglo la pobreza giraba en torno al 60 por 100 de la población, en 2017 había sido reducida al 34,6 por 100. En Ecuador, las turbulencias de la crisis económica en los países emergentes de Asia Oriental de 1997, que pronto se extendieron por la región dando lugar al ominoso “sexenio perdido” entre 1998 y 2003, se combinaron con la quiebra del sistema financiero del país al finalizar el siglo XX. La salida de la crisis consistió en la típica respuesta neoliberal basada en aplicar programas de rescate del sector bancario, operación que absorbió en torno al 23 por 100 del PIB (Ocampo, 2014, p. 19; Cotler, 2005); a la vez que el gasto público era restringido de forma severa. Mientras las asignaciones de la deuda externa absorbían en torno al 20 por 100 de los ingresos provenientes del mercado primario de hidrocarburos, la pobreza y la desigualdad social se extendieron de forma asombrosa, pasando de 3,5 millones en 1995 a 5,2 en 2001 de una población total que sobrepasaba ligeramente los 12 millones. Tan solo en ciertas zonas rurales de la región del litoral la pobreza se mantuvo “constante” (World Bank, 2004; Acosta, 2005). Todos los factores apuntados confluyeron en una alianza antineoliberal de movimientos sociales y políticos indígenas que auparon en el poder en

2007 a Rafael Correa. El motor de combustión del crecimiento económico, alimentado con el sector externo de materias primas, destinó un porcentaje muy considerable a políticas sociales, provocando, en consecuencia, un descenso positivo de la pobreza y la desigualdad. Entre 2009 y 2014 la pobreza por ingresos del país andino descendió del 36 al 22,5 por 100 y el coeficiente de Gini se redujo de 0,48 a 0,46 (Carrillo García, 2019; ONU, 2024).

Las evidencias *prima facie* mostraban que había regresado a la región el *ethos* del capitalismo de Estado a medida que las autoridades públicas corregían las discrecionalidades del mercado y contrarrestaban las políticas draconianas del Consenso de Washington. Pero el grado de dependencia económica que persistía con el sector primario a nivel continental era tan abrumador que en cierto modo parecía evocar los años que antecedieron a la década de 1930. La historia, sin embargo, no se repite. El orden jerárquico internacional de las potencias durante los primeros años del siglo XXI había sido drásticamente alterado. A finalizar la Guerra Fría, a pesar de disfrutar de una seguridad casi inquebrantable en sus propios dominios virtualmente ilimitados, la política exterior estadounidense se había aventurado, en el espacio geopolítico complaciente de la unipolaridad, en una tentativa temeraria de “dominación global” en dos estilos: la “neoconservadora” de Bush II y el “imperialismo liberal” de Bill Clinton y Barack Obama, aplastando cada uno de ellos al país en una serie de guerras expansionistas con unas consecuencias planetarias devastadoras. La administración de Donald Trump no era ni más ni menos que una peligrosa consecuencia de aquellos y de las ruinas sociales del medio siglo neoliberal estadounidense. En el proceso, dado que el viejo continente debía ser la “cabeza de puente geopolítica esencial de Norteamérica en Eurasia” —tal como había escrito el diplomático y ardiente defensor de la expansión de la OTAN Zbigniew Brzezinski en *The Grand Chessboard* (1997)— Europa Central y Occidental había profundizado cada vez más su estatus de “protectorado norteamericano, con unos Estados aliados que recuerdan a los antiguos vasallos y tribunos”. Por su parte, la China posmaoista había demostrado ser algo más que

un fallido experimento comunista, transformándose en la “locomotora de la economía mundial”, al mismo tiempo que en el “mayor exportador” de productos manufacturados dirigidos a los mercados occidentales, además de Japón (Anderson, 2014; 2010; Carrillo García, 2022). La extraordinaria industrialización y la transformación del entorno construido del gigante asiático junto a políticas macroprudenciales de perfil keynesiano y selectivas con el comercio internacional, produjeron a principios de siglo una explosión sin precedentes en el registro histórico de demanda efectiva de materias primas y recursos naturales en buena medida procedentes del suelo y subsuelo de América Latina. Esta nueva atmósfera del comercio mundial no solo desencadenó una fase expansiva procíclica de crecimiento económico en la región a través de la vigorización del sector externo primario, sino que también profundizó aún más procesos de desindustrialización prematura y mantuvo inalterados ciertos desequilibrios estructurales.

En primer lugar, la práctica totalidad de los gobiernos que se opusieron a las inflexiones neoliberales compartía un común discurso económico cargado de un enérgico “componente social” que parecía desenterrar el pasado de la era desarrollista. Sin embargo, el espíritu secular de las élites latinoamericanas, siempre reacias a “dar algo para no perderlo todo” (Hirschman, 1979, p. 96) siguió gravitando sobre la geografía política y económica de la región. Los sectores más dinámicos continuaron bajo control de “grandes grupos” de capital privado doméstico y extranjero, o ambos combinados, que a su vez se beneficiaron de “altas tasas de concentración de mercado” y de las influencias, frecuentemente venales, que tenían sobre los contratos y los reguladores públicos. Aunque los gobernantes progresistas intentaron, a veces desesperadamente, otras no tanto, tomar el control económico del país, finalmente el destino continental quedó sellado por el poder de enormes conglomerados familiares que priorizaron las “ventajas ricardianas pasivas” y los activos líquidos del mercado de materias primas a las inversiones en capital fijo. Por debajo de esta línea de satisfacción antischumpeteriana trazada sobre la acumulación de grandes fortunas, se hallaba una vasta masa de pequeñas em-

presas frecuentemente improductivas formadas por el 70 por 100 de la fuerza laboral de la región; el resto permanecía integrado en la extensa red de subsistencia de la economía informal, característica inconfundible de los regímenes neoliberales (Adelman y Pryluka, 2024; Palma, 2019). El legado de Prebisch, tan denostado en la era neoliberal, continuó durante el ciclo político progresista en los márgenes de la *praxis* política. Y, sin embargo, si el “crecimiento económico es el instrumento más poderoso para reducir la pobreza”, no es menos cierto que allí donde aquel ha permanecido relativamente estable ha sido porque los “gobiernos reestructuraron y diversificaron sus economías” (Rodrik, 2011, pp. 16-17). Esto no sucedió en la región. Probablemente Brasil fue el caso más asombroso de este fenómeno: mientras que en 1975 su producción industrial era un 60 por 100 superior a la producción combinada de India, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia y Taiwán, al escribir esto no superaba el 15 por 100 de la producción manufacturera de dichos países asiáticos (Palma, 2019, p. 945). La dinámica regional, con variaciones y tonos, había caído en la misma trampa. En 2014 el 80 por 100 del conjunto de exportaciones continentales destinadas al mercado chino (exceptuando a México y Costa Rica) estaba formado por combustibles fósiles principalmente petróleo, mineral de hierro, cobre en sus distintas formas, soja, harina de pescado, madera, azúcar, e incluso residuos de metales. Lógicamente, los desequilibrios de la balanza comercial eran abrumadores. Al mismo tiempo que aumentaban las exportaciones procedentes del sector primario, también lo hacían las importaciones del nuevo taller del mundo: los productos manufacturados chinos que apenas representaban un 2,3 por 100 en el primer año del siglo XXI, trece años más tarde alcanzaron un 16 por 100. Naturalmente, este comportamiento económico no podía prolongarse indefinidamente. El optimismo político y social sostenido por las altas tasas de crecimiento económico que había caracterizado a los años diez con porcentajes incluso de dos dígitos (hasta 2010 fue del 16 por 100 anual, alcanzando el PIB un promedio regional del 5 por 100), dio paso a un pesimismo generalizado cuando en 2014 se redujo drásticamente, no rebasando un tímido 1 por 100 (OCDE/CEPAL/CAF, 2015). Las consecuencias del declive de la bonanza económica pronto se dejaron sentir,

especialmente entre las clases sociales más vulnerables. Las sociedades latinoamericanas, una vez más, tenían que cargar con el lastre de una economía que reproducía espasmódicamente unos niveles de pobreza y desigualdad susceptibles, sin embargo, de ser políticamente corregidos. En 2023 al menos 172 millones de habitantes de una población total que podía superar ligeramente los 657 millones, no podía satisfacer sus necesidades materiales más elementales (CEPAL, 2024, p. 44). Como dijo en cierta ocasión Giovanni Arrighi, las opciones de autonomía para los países independientes, pero en la práctica neocoloniales, casi invariablemente han sido ajustadas y controladas por la “jerarquía global de la riqueza”; no obstante, “siempre hay algo que pueden llevar a cabo para aumentar (o disminuir) el bienestar de sus ciudadanos en un determinado nivel de pobreza o riqueza” (Arrighi, 2002).

En América Latina desde la era neoliberal, sin embargo, ese margen de maniobra política ha sido demasiado estrecho. La privatización de la esfera pública, el culto al enriquecimiento personal y una voladura total del espíritu comunitario produjo una clase social, sincronizada con el capital global, adicta a la “tiranía de la riqueza fácil”. Pero las élites reaccionarias y el nuevo espíritu del capitalismo global constituyen solo una parte de la respuesta de los desequilibrios regionales, lo que nos lleva a un segundo problema estructural irresuelto, a saber, que “la política social no es suficiente por sí sola para avanzar en términos de equidad social” (Bértola y Ocampo, 2022). Sin la menor duda, Keynes llevaba razón cuando afirmaba que el mundo estaba “regido por muy poco más que las ideas”, pero sería más preciso el juicio de Flaubert que, en alusión al secular conflicto filosófico sobre la primacía del espíritu o del materialismo en el curso de la interpretación de la historia, consideraba que ambas posiciones eran “dos impertinencias iguales” (Hirschman, 1961, pp. 15-59; Hirschman, 1991, p. 185). Los gobiernos de izquierdas latinoamericanos, como sus homólogos europeos, habían levantado una muralla china entre la economía y la política social. De hecho, como demostraron los casos del Brasil de Lula o el Chile del Frente Amplio, partido chileno fundado en 2017 por diversas coaliciones políticas de

izquierdas, la brecha que separaba los propósitos políticos de la nueva izquierda, sin duda suficientemente loables, de las urgencias sociales y económicas de las clases menos favorecidas era, con demasiada frecuencia, sorprendente. Mientras las jóvenes generaciones de clase media, o aspirantes a serlo, reclamaban derechos individuales que creían fundamentales como, por ejemplo, la extraña e inquietante explosión de diversidad sexual, la economía chilena no se había despegado de una renta “ricardiana pasiva”, basada en la explotación de recursos naturales sin valor agregado con destino fundamentalmente a China. El *pathos* político, apelando desesperadamente a las “necesidades urgentes”, renunció en cambio a “la agenda económica redistributiva” en aras de políticas “aceptables” para los “grupos dominantes” (Palma, 2020; Palma, 2025; Carrillo García, 2023). Paradójicamente, la alternativa para los regímenes progresistas latinoamericanos parecía residir en la socialdemocracia europea cuya política social había dejado en el pasado, al menos desde los años noventa, la agenda económica distributiva del Estado de Bienestar en favor del capital (financiero). De hecho, como dijo en una entrevista en el *Wall Street Journal* el 23 de febrero de 2012 uno de sus sepultureros y entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi: “el modelo social europeo está muerto” (D’Eramo, 2022, p. 122). El caso más ilustrativo y sorprendente fue el de Suecia, inspiración nórdica de la justicia social y espejo de la democracia europea; en este país escandinavo a pesar de que la tasa de renta disponible no dejó de crecer desde la década de 1980, su distribución terminó concentrada de forma abrumadora en el 0,1 por 100 de la estructura social, cuyos selectos miembros, después de cargas tributarias, disponían de una renta “treinta y ocho veces superior a la del asalariado medio”. De hecho, los niveles de concentración de riqueza y de desigualdad alcanzados en la Suecia de las primeras décadas de este siglo mantenían un patrón similar al de Brasil, Estados Unidos o Sudáfrica (Therborn, 2018).

En tercer lugar, y como consecuencia del entorno económico descrito, vastas regiones fueron adaptadas a los requerimientos agrícolas para plantaciones de cultivos de uso múltiple (“flex crops”) destinados a uso

alimentario o bien como fuentes de energía, teóricamente sostenibles, basadas en biocombustibles. De forma previsible, los niveles de concentración de la propiedad de la tierra, especialmente en Chile, Ecuador y Perú, llegaron a tal extremo que podían compararse con el periodo precedente a las reformas agrarias de los decenios sesenta y setenta del siglo pasado (Kay, 2015). La voraz competencia mundial por la captura de recursos naturales, *raison d'être* del capitalismo neoliberal basado en el consumismo conspicuo, llegó a la franja oriental latinoamericana que transcurre entre el Salar del Hombre Muerto, en el sur de la Puna de Atacama y algunas regiones de Chile, hasta el salar de Uyuni en el corazón de los Andes. Allí se concentraba al escribir esto en torno al 80 por ciento de las reservas mundiales de litio, un mineral estratégico destinado a favorecer la transición energética del Norte global, a expensas del Sur, y la fabricación del insaciable consumo mundial de dispositivos electrónicos de última generación (Carrillo García, 2022). Esta ruta económica “neoextractivista” se desarrolló, como había sucedido en el pasado, de espaldas a sus consecuencias sociales y ecológicas. Y no hay que subestimar los efectos de estas transformaciones en el tejido social rural. De hecho, las tensiones “territoriales y rurales” generadas por este modelo de crecimiento insostenible fueron agravadas drásticamente durante las últimas décadas. No solo se amplió la secular brecha “entre los intereses urbanos y rurales”, sino también la escalada de conflictos y violencia. Así, movimientos indígenas, pequeños agricultores y sindicatos agrarios ofrecieron una poderosa resistencia, aunque claramente insuficiente, frente al Estado, las empresas privadas y las clases sociales favorecidas por este modelo de extracción de renta. Incluso estos últimos contaron con el apoyo de trabajadores de los grandes centros urbanos cuyo “imaginario desarrollista” les alejaba virtualmente de los problemas ambientales o sociales “derivados de la minera, de los agronegocios, represas”, *inter alia*. Y como sabemos, la violencia, la desposesión y la exclusión sistemática suelen encarnar la muerte. El número de homicidios de activistas medioambientales registrado en todo el mundo entre 2002 y 2013 fue de 908 de los que el 83,7 por 100 (760 casos) tuvieron lugar en Latinoamérica. La intensidad y la cantidad de cadáveres coincidió con el ci-

clo expansivo de inversiones de capital y proyectos de perfil extractivo, pero su macabra tendencia no se ha detenido. Solo en el breve lapso del año 2016 se estima que fueron asesinados dos centenares de activistas, de los cuales más de la mitad perdieron la vida en la región (Svampa, 2013; 2019). Y, sin embargo, las palabras antiguas de Engels continúan resonando en nuestras adormecidas conciencias: por “cada victoria que creamos haber conseguido sobre la naturaleza, ella “acaba vengándose de nosotros” (Marx y Engels, 2010). Previsiblemente, de no cambiar las tendencias, en medio siglo gran parte de Brasil podría ser lisa y crudamente inhabitable; la selva amazónica podría sufrir un estrés hídrico sin precedentes en el registro histórico, empujando al pulmón del mundo “más allá de un punto crítico” y acabando en un “colapso irreversible” (Jurema, 2024).

Pero debemos concluir con una observación final. Paradójica, aunque no sorprendentemente dada la expansión ecuménica de la revolución neoliberal, el Viejo Mundo y el Nuevo convergieron. El colapso del contraejemplo soviético y su integración definitiva en los circuitos del capitalismo global, junto a la extinción del desarrollismo en los países de la periferia, fueron alimentando la insaciable sed de acumulación sin valor del capital ficticio “gracias a la disminución de los precios de los insumos importados o a los dividendos repatriados del extranjero”, o ambos factores combinados (Durand, 2018, p. 166). Durante los años que precedieron a la Gran Recesión de 2008, el bipartidismo plutócrata estadounidense y los cuadros políticos neoliberalizados de la “tercera vía” europea podían mirarse a través del espejo latinoamericano e identificarse con el brasileño Gustavo Franco, Domingo Cavallo en Argentina, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Fujimori en Perú, o Abdalá Bucaram en el centro del mundo, entre otros apóstoles de credo neoliberal citados en estas páginas. Si los primeros representaban los intereses del arsenal financiero, “una clase de parásitos” que ostenta un extraordinario poder “no solo para despojar periódicamente a los capitalistas industriales”, sino también para cruzarse de la forma más “peligrosa” en la “producción real”; los segundos, compartían un absoluto “desprecio por

la industria manufacturera” y un apego insaciable e irracional por “tomar sin producir” nada a cambio (Palma, 2020; 2019; Marx, 2010; Carrillo García, 2022; Hudson, 2018). *A fortiori*, la desigualdad y la precariedad se incrementaron abrumadoramente, y con ello el malestar político y social. Durante los primeros años del siglo actual, el PIB per cápita de la economía estadounidense era solo cuatro veces superior al de China. El del continente africano 1,9 veces mayor que los niveles que tenía en 1970, y el de América Latina no mantuvo un ritmo de crecimiento constante y sólido como “para empezar a converger con Europa y América del Norte” (Therborn, 2017).

El modelo de desarrollo descrito provocó un resultado sorprendentemente opuesto: en vez de incentivar a América Latina a “europeizarse”, estimuló a los países miembros de la OCDE a “bananizarse” (Palma, 2020). Desde la crisis de estancamiento de la década de 1970 que ha caracterizado a las sociedades posindustriales, la evolución hacia formas de capitalismo parasitario *à la* Ponzi fue disciplinando los mercados laborales para dejarlos desprotegidos de las presiones del capital. Como en la película *Sorry We Missed You* de Ken Loach, un psicodrama casi documental sobre la nueva condición laboral, el subempleo y otras formas de explotación humanas, constituyen el nuevo paradigma global del trabajo en el siglo XXI. El heterogéneo sector servicios podía absorber al escribir esto entre el 70 y el 80 por ciento de la mano de obra global de los países de renta elevada, pero también en Irán, Turquía, México, Brasil, Sudáfrica o Nigeria. La economía posindustrial que afrontaba los problemas de nuestro tiempo ya no era la economía fordista keynesiana, como tampoco era la que presagió Daniel Bell en 1973: “en vez de una economía de investigadores, instructores de tenis y cocineros con estrellas Michelin, el nuestro es un mundo mayoritariamente de peluquerías, servicio doméstico, vendedores de fruta y encargados de estanterías en Walmart” (Benanav, 2020, p. 135). La expansión de la financiarización, envuelta en crisis inmobiliarias y especulativas, compensó relativa y transitoriamente la decadencia del tejido industrial en las economías del Atlántico Norte; pero también reforzó la desindustrialización, desre-

guló los mercados laborales, elevó los precios de los bienes y servicios básicos, contrajo el régimen salarial y las tasas de ahorro de las clases medias y, como resultado, redujo al común de los ciudadanos, con la connivencia de las autoridades públicas, a variables dependientes de la abrumadora expansión del endeudamiento.

En los países del Sur global las promesas del desarrollo se vieron frustradas con demasiada terquedad y con amargas consecuencias. Y la vieja heterogeneidad de la periferia fue cediendo el paso a un infame patrón común. La hegemonía neoliberal, la desindustrialización prematura, la corrupción institucional, la deuda externa y la persecución de rentas fáciles, así como la externalización de la producción de las industrias más sucias y menos sostenibles desde el Norte global, trajeron consigo el auge del ilotismo laboral, una angustiosa expansión de la económica sumergida y de la pobreza; pero también la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas enteros. Es evidente que las alternativas políticas e intelectuales al fetichismo de mercado han sido vibrantes, pero claramente insuficientes tal como demuestran las incertidumbres generadas por la nueva ofensiva de la derecha en la región y las reacciones vitales de poblaciones enteras aplastadas por el peso muerto de la irracionalidad política global. Y sin embargo, *Nihil difficile volenti* (nada es difícil si hay voluntad) escribió en 1821 el ecuatoriano Vicente Rocafuerte, uno de los “padres de la América española” cuando los mosquetes y las bayonetas libraban a sangre y fuego las guerras de la Independencia (Rocafuerte, 1821/1823; Aguilar, 2012). Con esa misma tonalidad intelectual, escasos años después, en 1828, el acérrimo republicano de origen limeño Manuel Lorenzo de Vidaurre afirmó que la “desigualdad social era incompatible con el Estado republicano”: “igualdad, igualdad, sin la que jamás seremos libres ni felices, sin la cual no habrá virtud, justicia ni estabilidad en un gobierno democrático representativo” (Vidaurre, 1828, p. 92). ¿De verdad no hay alternativas?

Referencias

- Acosta, A. (2005). El aporte de las remesas para la economía ecuatoriana, Informe: Expert group meeting on international migration and development in Latin America and the Caribbean, Population Division Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat, Mexico.
- Adelman, J. (2003). Punto muerto en los Andes. *New Left Review*, 18, 27-60.
- Adelman, J. y Pryluka, P. (2024). Latin America: the next transition. *New Left Review*, 149, 131-154.
- Aguilar, J. A. (2012). *Ausentes del universo. Reflexiones sobre el pensamiento político hispanoamericano en la era de la construcción nacional, 1821-1850*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ahponen, T. (2023, April 5). What Happened in Finland. *Tribune*. Disponible en: <https://tribunemag.co.uk/2023/04/what-happened-in-finland>
- Anderson, P. (2006), Las ideas y la acción política en el cambio histórico, en Borón, Atilio A. et al. (comp.), *La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas*, Buenos Aires: CLACSO.
- Anderson, P. (2010). Dos revoluciones. *New Left Review*, 61, 55-90.
- Anderson, P. (2014). *Imperium et Consilium. La política exterior norteamericana y sus teóricos*. Madrid: Akal.
- Arguedas Díaz, Al. (1909). *Pueblo enfermo. Contribución a la psicología de los pueblos Hispano-Americanos*. Barcelona: viuda de Luis Tasso Editor.
- Arrighi, G. (2002). La crisis africana. Aspectos derivados del sistema mundo y aspectos regionales. *New Left Review*, 15, 5-33.
- Benanav, A. (2020). La automatización y el futuro del trabajo II. *New Left Review*, 120, 125-158.
- Bértola, L. y Ocampo, J. A. (2010). *Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia*. Madrid: Secretaría General Iberoamericana.

- Bértola, L. y Ocampo, J. A. (2022). La economía latinoamericana durante las primeras décadas del siglo XXI. *El Trimestre Económico*, vol. LXXXIX (1), n. 353, 39-71.
- Borón, A. (2003). *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Bulmer-Thomas, V. (1998). *La historia económica de América Latina desde la independencia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Cappelletti, Á. J. (2010). *La ideología anarquista*. Barcelona: El Grillo Libertario.
- Carrillo García, G. (2019). Triple revolución en Ecuador. Contradicciones de la economía política frente a la construcción de un Estado Social. *AREAS Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 39, 75-92.
- Carrillo García, G. (2022). *Interpretar el mundo. Ensayos sobre la crisis de las sociedades contemporáneas*. Murcia: Calblanque.
- Carrillo García, G. (2023). Los enemigos de la democracia. *Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social*, 2(4), 101-177. <https://doi.org/10.6018/reg.576071>
- Carrillo García, G. *La democracia incompleta. Historia de una idea revolucionaria previa a su triunfo* (en prensa).
- Casanovas Codina, J. (1995). Movimiento obrero y lucha anticolonial en Cuba después de la abolición de la esclavitud. *Boletín Americanista*, 45, 23-41.
- Cecchini, S. y Atuesta, B. (2017). *Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión*. CEPAL, Serie Políticas Sociales N. 224.
- Cerdá Mondéjar, C. M. (2025). Medio rural y modernización educativa en la primera mitad del siglo XX: proyectos de Misiones Culturales en México y Misiones Pedagógicas en España. *Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social*, 4(7), 367-404. <https://doi.org/10.6018/reg.648991>
- CEPAL (2005). Demographic Bulletin: "Latin America: urban and rural population projections, 1970-2025", Year XXXVIII, n. 76 Julio / July, Santiago, Chile.
- CEPAL, (2024). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024 (LC/PUB.2024/21-P/Rev.1), Santiago, Chile.

- Coatsworth, J. (2010). The Cold War in Central America, 1975-1991. En Leffler y Westad (eds.), *Cambridge History of the Cold War*, vol. 3, (pp. 220-221). Cambridge: Cambridge University Press.
- Cotler, J. (2005), Bolivia-Ecuador-Perú, 2003-2004: ¿tempestad en los Andes?, Real Instituto El Cano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Área: América Latina, Documento Trabajo (51).
- Davidson, N. (2013). *Transformar el mundo. Revoluciones burguesas y revolución social*. Barcelona: Pasado & Presente.
- Davidson, N. (2010). From deflected permanent revolution to the law of uneven and combined development. *International Socialist*, 128, disponible en: <https://isj.org.uk/from-deflected-permanent-revolution-to-the-law-of-uneven-and-combined-development/>
- De la Fuente, A. (2018). The Rise of Afro-Latin America. *ReVista, Harvard Review of Latin America*, 2-9.
- D'Eramo, M. (2022). *Dominio. La guerra invisible de los poderosos contra los súbditos*. Barcelona: Anagrama.
- Díaz-Alejandro, C. (1988). América Latina en los años treinta. En R. Thorp (comp.) *América Latina en los años treinta. El papel de la periferia en la crisis mundial* (pp. 31-68). México: Fondo de Cultura Económica.
- Domenech, A. (2019). *El eclipse de la fraternidad*. Madrid: Akal.
- Drinot, P. y Knight, A. (2015). *La Gran Depresión en América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Durand, C. (2018). *El capital ficticio. Cómo las finanzas se apropian de nuestro futuro*. Barcelona: Ned Ediciones.
- Durand, C. (2019). En la sala de mandos de la crisis. *New Left Review*, 116/117, 221-234.
- Galbraith, J. K. (1976). *El crac del 29*. Barcelona: Ariel.
- Ginzberg, V. y Dandan, A. (comp.) (2021). *El Nunca más: y los crímenes de la dictadura*. Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación.

- Hale, Ch. A. (1991). Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930. En L. Bethell (ed.) *Historia de América Latina* vol. 8, *América Latina: cultura y sociedad, 1830-1930* (pp. 1-64). Barcelona: Crítica.
- Hall, M. M. y Spalding, H. A. Jr. (1991). La clase trabajadora urbana y los primeros movimientos obreros de América Latina, 1880-1930. En L. Bethell (ed.) *Historia de América Latina*, vol 7. *América Latina: Economía y Sociedad, c. 1870-1930* (pp. 281-315). Barcelona: Crítica.
- Halperin Donghi, T. (2002). América Latina independiente: economía y sociedad. En *Historia económica de América Latina* (pp. 9-47). Barcelona: Crítica.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Harvey, D. (2017). *El cosmopolitismo y las geografías de la libertad*. Madrid: Akal.
- Hirschman, A. O. ([1961]1963). Ideologías del desarrollo en América Latina. En A. O. Hirschman (comp.). *Controversia sobre Latinoamérica* (pp. 57-58). Buenos Aires: Ed. del Instituto.
- Hirschman, A. O. (1979). The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for Its Economic Determinants. En D. Collier, (ed.). *New Authoritarianism in Latin America* (pp. 61-98). New Jersey: Princeton University Press.
- Hirschman, A. O. (1984). *De la economía a la política y más allá*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Hirschman, A. O. (1987). La economía política del desarrollo latinoamericano. *El Trimestre Económico*, 216, vol. 54 (4), oct-dic., 769-804.
- Hirschman, A. O. (1991). *The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy*. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, Belknap Press.
- Hirschman, A. O. (2014). *Las pasiones y los intereses. Argumentos en favor del capitalismo previos a su triunfo*. Madrid: Capitán Swing.
- Hobsbawm, E. (2012). *Cómo cambiar el mundo*. Barcelona: Crítica.
- Hudson, M. (2012). *The Road to Debt Deflation, Debt Peonage, and Neofeudalism*. Levy Economics Institute, Working Paper, 708.
- Hudson, M. (2018). *Matar al huésped. Cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía global*. Madrid: Capitán Swing Libros.

- Hylton, F. y Thomson, S. (2005). The Chequered Rainbow. *New Left Review*, 35, 40-64.
- Ibarra, H. (2003). Orígenes y decadencia del Gamonalismo. *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*, 19, 131-150.
- Jacobsen, N. (2007). Liberalismo tropical: cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-1885. *Historia Crítica*, 34, julio-diciembre, 118-147.
- Jurema, B. (2024). Green Brazil? *New Left Review* (Sidecar), disponible en: <https://newleftreview.org/sidecar/posts/green-brazil>
- Kay, C. (2015). The Agrarian Question and the Neoliberal Rural Transformation in Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 100, december, 73-83.
- Lenin, V. I. (1970). *El imperialismo, fase superior del capitalismo*. En V. I. Lenin, *Obras Escogidas en tres tomos*, vol. 1. Moscú: Progreso Ed.
- List, F. (1841/1997). *Sistema nacional de economía política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Long, N. y Roberts, B. (1997). Las estructuras agrarias de América Latina, 1930-1990. En L. Bethell, (ed.), *Historia de América Latina. Economía y sociedad desde 1930*, vol. 11 (pp. 278-334). Barcelona: Crítica.
- Löwy, M. (2007). *El marxismo en América Latina*. Santiago de Chile: LOM Ed.
- Maddison, A. (2004). La economía de occidente y la del resto del mundo en el último milenio. *Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History*, Año XXII, n. 2, 259-336.
- Manzano M. (2023). El desmantelamiento de Brasil por las olas de neoliberalismo. *El trimestre Económico*, vol. XC (3), n. 359, 805-826.
- Marichal, C. (1988). *Historia de la deuda externa de América Latina. Desde la Independencia hasta la Gran Depresión, 1820-1930*. México: Alianza Editorial.
- Marx, K. (2007). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse)* borrador 1857-1858 VOL., 1. México: Siglo XXI editores.
- Marx, K. y Engels, F. (2010). *Collected Works*. London: Lawrence & Wishart Electric Book.

- Mazower, M. (2017). *La Europa Negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo*. Valencia: Barlin Libros.
- Ocampo, J. A. (2012). *La historia y los retos del desarrollo latinoamericano*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Ocampo, J. A. (2014). La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia. En J. A. Ocampo et al., *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica* (pp. 19-51). CEPAL.
- O'Donnell, G. (1993). Estado, Democratización y ciudadanía. *Nueva Sociedad*, 128, 62-87.
- Organización de las Naciones Unidas (2024). *A/HRC/56/61/Add.2: Visita al Ecuador – Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter*.
- Palma, J. G. (2019). Desindustrialización, desindustrialización “prematura” y “síndrome holandés”. *El trimestre económico*, vol. LXXXVI (4), núm. 344, octubre-diciembre, 901-966.
- Palma, J. G. (2020), “América Latina en su “Momento Gramsciano”. Las limitaciones de una salida tipo “nueva socialdemocracia europea” a este impasse”. *El Trimestre Económico*, 87 (4), 348, 985-1.031.
- Palma, J. G. (2022). Latinoamérica es la región con el menor crecimiento de la productividad en el mundo desde las reformas neoliberales. La nueva trampa del ingreso medio: rentas fáciles no generan precisamente élites schumpeterianas. *El Trimestre Económico*, vol. LXXXIX (3), n. 355, 943-977.
- Palma, J. G. (2025). América Latina y su “gatopardismo a la inversa”: para que todo pueda seguir igual, *nada* puede cambiar. ¿Trampa del ingreso medio o “trampa neoliberal”? *El Trimestre Económico*, vol. XCII (1), n. 365, 7-74.
- Panitch, L. (2000). El nuevo estado imperial. *New Left Review*, 3, 5-18.
- Panitch, L. (2013). El imperio americano y el Sur global. *Mundo Siglo XXI*, vol. VIII (30), 37-43.
- Pena de Matsushita, M. (2009). El romanticismo y el liberalismo. En E. Dussel, E. Mendieta y C. Bohórquez (ed.), *El pensamiento filosófico latinoamericano, del caribe y “latino” (1300-2000)*. *Historia, corrientes, temas y filósofos* (pp. 194-202). México: Siglo XXI ed.

- Poy, L. y González Rittler, E. (2017). Influencias italianas y alemanas en los orígenes del socialismo argentino. Enrico Ferri y Karl Kautsky en las páginas de *Vorwärts* y *La Vanguardia* (1894-1895). *Izquierdas*, 36, 55-77.
- Rama, C. M. y Cappelletti, Á. J. (1990). *El anarquismo en América Latina* (selección y notas). Venezuela: Biblioteca Ayacucho.
- Rapoport, M. et al. (2000). *Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2000*. Buenos Aires: Ed. Macchi.
- Riella, A. y Mascheroni, P. (2011). Desigualdades sociales y territorios rurales en Uruguay. *Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales*, 7, 39-63.
- Rocafuerte, V. (1821/1823). *Ideas necesarias a todo pueblo americano que quiera ser libre*. México: Puebla.
- Rodrik, D. (2012). *Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Rodríguez Minor, R. y Reich López, Ch. (2021). El neoliberalismo en Argentina. Percepciones ciudadanas de una crónica fatalista. *El Trimestre Económico*, Vol. LXXXVIII (2), n. 350, 483-522.
- Safford, F. (1991). Política, ideología y sociedad. En L. Bethell (ed.), *América Latina independiente, 1820-1870. Historia de América Latina*, 6 (42-104). Barcelona: Crítica.
- Sánchez-Albornoz, N. (1991). La población de América Latina, 1850-1930. En L. Bethell (ed.), *Historia de América Latina: economía y sociedad, c. 1870-1930*, 7 (pp. 106-132). Barcelona: Crítica.
- Shaikh, A. (2007) (ed.). *Globalization and the Myths of Free Trade History, theory, and empirical evidence*. USA y Canadá: Routledge.
- Shaikh, A. (1990). *Valor, acumulación y crisis. Ensayos de economía política*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.
- Sokoloff, Kenneth L. y Engerman, Stanley L. (2000). *History Lessons. Institutions, Factor Endowments and Paths of Development in the New World. Journal of Economic Perspectives*, vol. 14 (3), 217-232.
- Stiglitz, J. E. (2003). Whither reform? Towards a new agenda for Latin America. *Cepal Review*, 80, 7-37.

- Stiglitz, J. E. (2016). *Cómo hacer que funcione la globalización*. Barcelona: Penguin Random House.
- Svampa, M. (2013). Consenso de los *Commodities* y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, N. 244, marzo-abril, 30-46.
- Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. México: CALAS.
- Therborn, G. (2011). Inequalities and Latin America. From the Enlightenment to the 21st Century. *desiguALdades.net Working Paper Series*, n.1, Berlín.
- Therborn, G. (2018). El ocaso de la socialdemocracia sueca. *New Left Review*, 113, 7-29.
- Therborn, G. (2022). El mundo y la izquierda. *New Left Review*, 137, 25-82.
- Thomson, S. et al., (2018). *Neoliberalism and Lowland Ascendancy. The Bolivia Reader: History, Culture, Politics*. Estados Unidos: Duke University Press.
- Tovar González, L. (2009). Las fundaciones de la filosofía latinoamericana. En E. Dussel, E. Mendieta y C. Bohórquez (ed.), *El pensamiento filosófico latinoamericano, del caribe y "latino" (1300-2000)*. *Historias, corrientes, temas y filósofos* (pp. 434-445). México: CREFAL/Siglo XXI.
- Trotsky, L. (2001). *Revolución permanente*. Madrid: Edición de la Fundación Federico Engels.
- Vidaurre, M. L. de (1828). *Efectos de las facciones en los gobiernos nacientes*. Boston: W. W. CLAPP.
- Whitehead, L. (1997). Una nota sobre la ciudadanía en América Latina. En L. Bethell (ed.), *Historia de América Latina. Política y Sociedad desde 1930*, 12 (pp.67-72). Barcelona: Crítica.
- World Bank (2004). *Ecuador Poverty Assessment, Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit Latin America and the Caribbean Region* Washington, D. C.